

(S-1872/12)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º.- Modifícase los incisos 1º y 4º del artículo 80 del Código Penal que quedarán redactados de la siguiente forma:

ART. 80. - Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare:

1º) A su ascendiente, descendiente, cónyuge o ex cónyuge, conviviente o pareja, sabiendo que lo son, o persona con quien haya estado vinculado en una relación íntima o afectiva de cualquier naturaleza.

4º) Por placer, codicia, odio racial, religioso, en razón de la orientación sexual, identidad de género o su expresión.

Artículo 2º.- Incorpórese el Artículo 80 bis al Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:

ART. 80 bis.- Femicidio: Se impondrá reclusión o prisión perpetua, pudiéndose aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare a una mujer por su condición de serlo.

Artículo 3º.- Incorpórese el inciso 4º al artículo 307 del Código Civil, que quedará de la siguiente manera:

4º) Por ser autor, coautor, instigador o cómplice por el delito de femicidio o tentativa de femicidio, contra la madre de sus hijos, respecto de ellos.

Artículo 4º.- Incorpórese el Artículo 310 bis al Código Civil, que quedará redactado de la siguiente manera:

ART. 310 bis.- Subsistirán los deberes alimentarios, manutención, educación, habitación, asistencia y gastos por enfermedad, en todos los casos de privación de la patria potestad previstos en este Código.

Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Elena M. Corregido.-

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, sin distinción alguna de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Desde un punto de vista más relacional, los derechos humanos se han definido como las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad, que permita a los individuos ser personas jurídicas, identificándose consigo mismos y con los otros, pero se ha dado una escasa relevancia en el ámbito de los derechos humanos a las violencia sexual que sufren las mujeres en todas sus manifestaciones.

Si hablamos de la violencia contra la mujer, podemos definirla como todo tipo de violencia ejercida contra la mujer por su condición de tal. Esta violencia, es consecuencia de la histórica posición de la mujer en la familia patriarcal, subordinada al varón, carente de plenos derechos como persona, presentando numerosas facetas que van desde la discriminación y el menosprecio hasta la agresión física o psicológica y el asesinato. Produciéndose en muy diferentes ámbitos (familiar, laboral, formativo, etc.), y adquiere especial dramatismo en el ámbito de la pareja y doméstico, en la cual anualmente, decenas o cientos de mujeres son asesinadas a manos de sus parejas en diferentes países del mundo.

En la Roma clásica, El paterfamilias tenía sobre sus hijos en derecho a vida y muerte; podía venderlos como esclavos en territorio extranjero, abandonarlos al nacer o entregarlos a manos de los familiares de sus víctimas si habían cometido algún delito; desposarlos y pactar o disolver sus matrimonios. Pero así como los varones pasaban a ser paterfamilias cuando moría el padre, y adquirían todas sus atribuciones jurídicas dentro de su familia, las mujeres, por el contrario, iban a permanecer de por vida subordinadas al poder masculino, basculando entre el padre, el suegro y el esposo.

La Asamblea General de las Naciones Unidas en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se definió la violencia contra la mujer en su artículo 1º, como: “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la

privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

En 1995, bajo los auspicios de la ONU en el Congreso sobre la Mujer celebrado en Pekín, se definió la expresión violencia de género siendo la traducción del inglés gender-based violence o gender violence. Con ella se identifica la violencia, tanto física como psicológica, que se ejerce contra las mujeres por razón de su sexo, como consecuencia de su tradicional situación de sometimiento al varón en las sociedades de estructura patriarcal.

En el mundo, la violencia contra la mujer por parte de su pareja o ex pareja está generalizada dándose en todos los grupos sociales independientemente de su nivel económico, cultural o cualquier otra consideración. Aún siendo de difícil cuantificación, dado que no todos los casos trascienden más allá del ámbito de la pareja, se supone que un elevado número de mujeres sufren o han sufrido este tipo de violencia.

El femicidio toma en consideración: la relación inequitativa entre los géneros, la estructura de poder y el control que tienen los hombres sobre las niñas y mujeres o personas de identidad de género femenina por el solo hecho de serlo.

En países donde no existe la figura de femicidio, este delito es juzgado como un homicidio, parricidio o infanticidio de acuerdo a cada legislación en particular; por todo esto tiene que haber un equilibrio entre el debido proceso hacia el victimario y la garantía de su derecho de legítima defensa con la garantía de los derechos de las víctimas y también de las víctimas colaterales de los femicidios.

Los rasgos más visibles de la violencia contra la mujer son: las golpizas y los asesinatos, sin embargo, los maltratos de “baja violencia” y los “maltratos psíquicos” que mantenidos en el tiempo quebrantan la autoestima de la mujer, también ocurren. Cuando trasciende un caso de violencia, la mujer puede llevar años sufriendolo. Y si los maltratos pueden producirse en cualquier etapa de la historia de una relación, cualquiera sea la naturaleza de la misma, es en el momento de la ruptura y tras esta, si se produce, cuando llegan a exacerbarse.

Es frecuente tratar el tema de los maltratos como casos individuales, entendiendo que los maltratadores sufrirían una suerte de trastornos emocionales que los conducirían a maltratar a la mujer y a agredirlas. Esta sería una visión del problema tranquilizadora que no pondría en cuestión el modelo patriarcal.

Un avance significativo en la temática lo constituye la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer: Convención de Belem Do Para”. En su artículo 1° que “debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. Asimismo esta Convención garantiza a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado y al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.

Además establece como obligación de los Estados Partes el "incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer".

Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.

Elena M. Corregido.-

CONGRESO NACIONAL

CÁMARA DE SENADORES

SESIONES ORDINARIAS DE 2012

ORDEN DEL DÍA N° 983

Impreso el día 13 de septiembre de 2012

SUMARIO

COMISIÓN DE JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES Y DE LA BANCA DE LA MUJER

Dictamen en distintos proyectos de ley de varios señores senadores y en el venido en revisión, modificando el Código Penal. **Se aconseja aprobar otro proyecto de ley.** (S.-205, 267, 384, 383, 611, 788, 967, 1.058/11; 18, 110, 162, 535, 563, 1.460, 1.872/12 y C.D.-16/12).

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de la Banca de la Mujer han considerado el proyecto de ley de la señora senadora Sonia Margarita Escudero, modificando el artículo 80 del Código Penal, incluyendo el agravante al homicidio del conviviente (S.-205/11); el proyecto de ley de la señora senadora Ana María Corradi de Beltrán, modificando el artículo 80 del Código Penal incorporando la violencia de género como agravante en el delito de homicidio (S.-267/11); el proyecto de ley de la señora senadora Liliana Fellner, modificando el artículo 80 del Código Penal, incorporando como agravantes el homicidio cometido contra pareja o conviviente y el de odio de género (S.-382/11); el proyecto de ley de la señora senadora Blanca Osuna,

modificando el artículo 80 del Código Penal, incluyendo el agravante al homicidio del conviviente o ex conviviente (S.-383/11); el proyecto de ley de la señora senadora María José Bongiorno, modificando el inciso 1º del artículo 80 del Código Penal, incluyendo dentro de las figuras tomadas como vínculo familiar la del hermano biológico o por adopción y el concubino (S.-611/11); el proyecto de ley de la señora senadora María de los Ángeles Higonet, modificando el artículo 80 del Código Penal, en relación a la incorporación del delito de femicidio (S.-788/11); el proyecto de ley de la señora senadora Ada Iturrez de Cappellini, sustituyendo el artículo 80 del Código Penal, en relación a la incorporación del delito de femicidio (S.-967/11); el proyecto de ley del señor senador Carlos Saúl Menem, por el cual se modifica el Código Penal, agravando las penas para los delitos cometidos contra el cónyuge o concubino (S.-1.058/11); el proyecto de ley del señor senador Ernesto Ricardo Sanz, modificando el Código Penal y la ley 23.592, antidiscriminatoria, incorporando la figura delictiva de femicidio y derogando el avenimiento en los delitos contra la integridad sexual (S.-18/12); el proyecto de ley de la señora senadora Marina Ríofrío, modificando el artículo 80 del Código Penal, tipificando el delito de femicidio (S.-110/12); el proyecto de ley de la señora senadora Graciela Agustina Di Perna, modificando el Código Penal respecto de incorporar la figura del femicidio (S.-162/12); el proyecto de ley del señor senador Daniel Filmus, sustituyendo el artículo 80 del Código Penal, incorporando entre las agravantes al femicidio, al femicidio vinculado y al homicidio por orientación sexual (S.-535/12); el proyecto de ley del señor senador Horacio Lores, modificando el Código Penal, incluyendo la figura del femicidio como agravante del homicidio y otras cuestiones conexas (S.-563/12); el proyecto de ley de la señora senadora Hilda Aguirre, modificando el inciso 1º del artículo 80 del Código Penal, por el cual se incorpora el femicidio como homicidio agravado (S.-1.460/12); el proyecto de ley de la señora senadora Elena Mercedes Corregido, modificando el artículo 80 del Código Penal, respecto de incorporar la figura del femicidio (S.-1.872/12); el proyecto de ley

venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados, modificando el artículo 80 del Código Penal respecto del homicidio agravado (C.D.-16/12); y teniendo a la vista el proyecto de ley de los señores senadores Pedro Guillermo Guastavino y otros, por el cual se garantiza la protección de la vida de las mujeres contra actos de violencia que tengan por objeto poner fin a la misma (S.-1.212/12); y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados, ...

Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 80 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 80: Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare:

- 1º – A su ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente, sabiendo que lo son;
- 2º – Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso;
- 3º – Por precio o promesa remuneratoria;
- 4º – Por placer, codicia, odio racial, religioso, a la orientación sexual, a la identidad de género o su expresión;
- 5º – Por un medio idóneo para crear un peligro común;
- 6º – Con el concurso premeditado de dos o más personas;
- 7º – Para preparar, facilitar, consumir u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito;
- 8º – A un miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, por su función, cargo o condición;
- 9º – Abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario;

10. — A su superior militar frente a enemigo o tropa formada con armas;
11. — Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o se ha mantenido una relación en los términos del inciso 1°.

Cuando en el caso del inciso primero de este artículo, mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho a veinticinco años. Esto no será aplicable a quien anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima, otra mujer u otra persona que se autoperciba con identidad de género femenino.

Art. 2° — Incorpórase como artículo 80 bis al Código Penal el siguiente:

Artículo 80 bis: Se impondrá prisión perpetua al hombre que matare a una mujer o a una persona que se autoperciba con identidad de género femenino y mediare violencia de género.

Art. 3° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 26 de junio de 2012.

Pedro G. Á. Guastavino. — Marina R. Riofrio. — María de los Ángeles Higonet. — Luis A. Juez. — Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. — Hilda C. Aguirre de Soria. — Inés I. Blas. — Marcelo J. Fuentes. — María J. Bongiorno. — Ana M. Corradi de Beltrán. — Daniel F. Filmus. — Elena M. Corregido. — Rolando A. Bermejo. — María G. de la Rosa. — Pablo G. González. — María R. Díaz. — Liliana B. Fellner. — Sonia M. Escudero. — Sandra D. Giménez. — María E. Labado. — María L. Leguizamón. — Mirtha M. T. Luna. — Blanca M. del Valle Monllau. — Laura G. Montero. — Norma E. Morandini. — Nanci M. A. Parrilli.

*— Beatriz L. Rojkés de Alperovich. —
Elsa B. Ruiz Díaz.*

Con disidencias parciales:

Luis P. Naidenoff. — Ernesto R. Sanz.

ACLARACIÓN:

Los distintos proyectos de ley considerados por las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de la Banca de la Mujer, se encuentran a disposición de los señores senadores en el expediente original y en la página web del Senado.

ANTECEDENTES

(I)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1.- Modifícase el inciso 1° del artículo 80 del Código Penal, que quedará redactado como sigue:

“Inciso 1°: a su ascendiente, descendiente, cónyuge, conviviente, sabiendo que lo son. Se entiende por conviviente al hombre o la mujer que se encuentren en estado de aparente matrimonio durante un lapso de cinco años como mínimo”.

Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sonia M. Escudero.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

La consideración de la unión libre o concubinato, es decir, la situación en la que se encuentran un hombre y una mujer que hacen vida marital sin estar unidos en matrimonio ha quedado fuera de la legislación nacional. Sólo disposiciones aisladas han dado cuenta de la existencia de una realidad incontrastable.

La conveniencia de la facilitación del matrimonio reconoce, a todas luces, razones morales, sociales y económicas. Pero como he venido sosteniendo públicamente, la posición abstencionista del orden jurídico es insuficiente para resolver las motivaciones afectivas, sexuales y culturales que determinan la existencia de las parejas de hecho.

No debemos entonces, quienes detentamos responsabilidades institucionales, confundir la obligación política que tenemos de componer los intereses sociales con la ambición de modelar una sociedad a partir de los propios prejuicios.

En todo caso, debemos hacernos cargo de una realidad.

Para confrontarla, basta con revisar los datos estadísticos oficiales y los provisorios disponibles. Los matrimonios legales coexisten con la cohabitación y las familias ensambladas, las madres solteras, los divorcios, la separación de hecho, etc. “El escenario cotidiano de los argentinos es que por un lado se identifica un ideal de familia o al menos se señala una definición de familia que en promedio es cada vez menos representativa” (Informe Argentino sobre Desarrollo Humano, 1998, Tomo 1, pág. 114.-)

Las investigaciones sobre las normas jurídicas y las ideologías políticas relativas a la familia argentina dan cuenta de los diferentes andariveles por los que discurrió el tratamiento de la cuestión como el relativo al crecimiento poblacional y la cristalización de relaciones de género en cada momento concreto de nuestra historia.

Las normas relativas a la familia, con anterioridad a la sanción de los códigos de fondo, eran las heredadas de la tradición hispana y monárquica que provenían del derecho canónico. De allí que, pese a la fuerte oposición de vastos sectores de opinión, el Código civil convalidó el modelo de relaciones familiares del código canónico que consagró al hombre como jefe indiscutido, imponiendo severas restricciones a los derechos civiles de la mujer. Este modelo irradió al resto de la legislación. Así, por ejemplo, el código penal valoró más severamente el adulterio de la mujer que el del marido, imponiéndole penas más duras.

La modernización de la vida social argentina a fines del siglo XIX, acompañada por un fuerte proceso de secularización, determinó en la década del '80 la transferencia al Estado de una serie de actividades que siempre habían estado a cargo de la Iglesia; como la educación, el registro de los casamientos, nacimientos y defunciones y la consagración de los matrimonios. Así vio la luz la ley de matrimonio civil, entre otras.

A lo largo de la pasada centuria, una lenta y paulatina corrección en la legislación comenzó a cristalizar el cambio social traído por el progreso, que tuvo como destino inexorable la democratización de la familia. (Desde el reconocimiento de derechos políticos a las mujeres, la sanción de la ley de la patria potestad compartida y el divorcio vincular para señalar los hitos más sobresalientes).

No obstante, poner de relieve estos avances no implica desconocer como bien refiere Susana Torrado con cita de Grosman, que “el mapa de la ley muchas veces está distante del paisaje real... y que los ideales pregonados sólo iluminan el largo y paciente camino que debemos transitar...”

En ese paisaje real se encuentran los derechos de los convivientes de una relación more uxorio que, como se señalara más arriba, aún no han tenido debido tratamiento.

Como parte de una regulación integral de la cuestión de las parejas de hecho, he presentado diversos proyectos que están en estudio en las distintas Comisiones de este Senado. En ese marco considero que corresponde abordar la revisión de diversas normas del código penal que aluden al matrimonio o a los derechos de los cónyuges.

El artículo 80 del Código Penal contempla el homicidio agravado. En el caso del inciso 1° es el vínculo lo que determina el agravante; mientras que los incisos 2° y 6° -antes de ser derogado-, el modo de comisión; el inciso 3° y 4° los móviles; el inciso 5° los medios utilizados y el 7° los fines.

Finalmente, el último párrafo establece una atenuación de la pena para el caso de que en la comisión de un delito agravado por el vínculo concurren circunstancias extraordinarias de atenuación.

Se reprime así al parricidio, al filicidio y al uxoricidio.

- Se llama parricidio al homicidio cometido en la persona de un ascendiente, descendiente o cónyuge, conociendo esa calidad de la víctima (Soler).

- En el derecho antiguo y moderno, se da el nombre de parricidio a la muerte del padre, del hijo, del cónyuge, del hermano o del pariente comprendido en determinado grado de parentesco (Ramos).

Para configurar esta forma agravada del homicidio, el Código exige el conocimiento de la existencia de ese vínculo por parte del autor.

Por su parte la jurisprudencia de los tribunales ha dejado sentado que “La simple cohabitación, el concubinato, el trato mutuo de marido y mujer, no basta para la calificación penal del uxoricidio”. (Cám. Fed. Paraná, LL, I-457; J.A., 50-19).

La doctrina ha señalado que la agravación del homicidio, por razón del parentesco, se funda en la mayor peligrosidad exteriorizada por el agente quien además de violar la ley escrita, atenta contra las propias leyes de la naturaleza, evidenciando la carencia de sentimientos primarios. El parricidio se reprime con pena más grave porque viola un vínculo moral inherente a la naturaleza humana.

El agravamiento del homicidio por el matrimonio se funda en el menosprecio del respeto que se deben mutuamente los esposos.

Para la configuración del agravante es necesario tanto el elemento objetivo (existencia del vínculo) como el subjetivo (conocimiento de dicho vínculo).

Así también lo ha ratificado la jurisprudencia, que ha señalado en idéntico sentido que “Cuando el artículo 80 dispone que se aplicará reclusión perpetua o prisión perpetua al que matare a su esposa, presume que el esposo, además de violar la ley con la destrucción de una vida humana, atenta contra las propias leyes de la naturaleza con la carencia de evidentes sentimientos primarios. (T. S. Santa Fe, LL, 48-613, disidencia).

En lo que aquí interesa, la calificación sólo alcanza a quien ha contraído matrimonio válido para las leyes argentinas puede considerarse casado.

De allí que, la hipótesis de la muerte de la concubina, ha sido considerada dentro del tipo del homicidio simple, porque en este caso es claro que no puede hablarse de cónyuges.

El presente proyecto incluye en el agravante al homicidio del conviviente. En consonancia con lo que venimos propiciando, hablamos de conviviente para referir a la unión de hecho como unión sexual del hombre y la mujer que se encuentren en estado de aparente matrimonio durante un lapso de cinco años, como mínimo.

Es claro que el mismo fundamento que ha servido para sostener la calificación en el caso de los cónyuges, es aplicable a quien ha formado una unión estable sin vínculo jurídico. Porque lo que determina el reproche es el hecho del menosprecio que exhibe quien mata a su pareja respecto del deber de respeto que le debe, al margen del reconocimiento efectuado por la autoridad pública y dos testigos de ese vínculo. Es así que lo que repugna y por ende, merece la pena más severa, es que se atente contra la vida de uno de los miembros de una relación vincular, que no por no tener reconocimiento legal, deja de ser tal. Puesto que el afecto y la intimidad son los que determinan el compromiso de la vida en común que importa derechos y deberes de entre los que se desprende el de respeto.

Para saber de qué estamos hablando, es bueno repasar los últimos guarismos de los que disponemos. Así, según el censo del 2001, en la Argentina sobre un total de 26.681.048 habitantes de más de 14 años, había un total de 13.031.050 personas integradas en un “núcleo conyugal”; de éstas, 9.830.361 estaban unidas en matrimonio tradicional (39,8%), pero 3.200.689 estaban unidas de hecho (15%). En mi provincia, por ejemplo, sobre 715.881 personas mayores de 14 años, el 32,5% estaban casadas y mucho más de la mitad de este porcentaje, el 18,2%, unidas de hecho. Desde 1980, disminuye el porcentaje de personas casadas, y crece el de las personas en pareja de hecho: 1980, 52,9% y 6,8%; 1991, 47,6% y 10,4%. En 2001, como vimos, 39,8% y 15%. Estas tendencias se confirman con los datos provisorios más actuales.

Estas y otras cifras, que dan cuenta de relaciones sexuales tempranas y fuera del matrimonio, uniones de hecho, familias ensambladas, así como las que hablan de la violencia doméstica, son algunas de las características actuales de la vida en pareja y familiar que también formaron parte de la vida cotidiana del pasado, aunque parezcan un fenómeno de la modernidad.

No obstante, en esas conductas está tanto la marca de las problemáticas específicas del presente, como aquella herencia que permite indagar sobre sus orígenes. Con contextos muy diferentes, no pocos fenómenos que caracterizan a las familias hoy también constituían problemáticas en el pasado, ha sostenido la historiadora Mónica Ghirardi refiriéndose al siglo XVIII y primera mitad del XIX. “Como hoy, no pocas parejas transcurrían su existencia sin pasar

jamás por el altar y no pocos hijos nacían fuera del matrimonio”refiere en la publicación sobre “Matrimonios y familias en Córdoba, 1700-1850”.

El índice de niños que nacían fuera del matrimonio en Córdoba era “superior al 40 por ciento a fines del siglo XVIII; y no solamente en los sectores menos favorecidos de la sociedad sino también en el estrato de los blancos” -señala la historiadora-, que refiere que muchas de las normas y costumbres que observó en los 680 expedientes que analizó, eran las mismas formas de vida que se registraban en otras partes de América colonial, y en la posterior América republicana.

Quizás la diferencia más notable entre el ayer y el hoy es lo que se ha denominado un 'debilitamiento del control institucional' -laico y eclesiástico- en la vida de las parejas, y un aumento del rechazo de las personas a la injerencia pública en el ámbito de las conductas privadas. Por su parte, el antropólogo inglés Jack Goody, afirma que “ni la violencia doméstica, ni el divorcio -entendido como abandono espontáneo del hogar- ni las familias ensambladas constituyen invenciones de la contemporaneidad”.

“Todos estos fenómenos -afirma-, están hoy más publicitados, pero no eran ajenos a las familias históricas. Tampoco el 'matrimonio a prueba' constituye una novedad, ni las relaciones sexuales tempranas en los jóvenes, y eso en todos los grupos de la sociedad”.

Sobre esa base y según puede advertirse, la reducción de la punición penal en su modalidad agravada al atentado contra la vida del cónyuge, es un efecto de la cultura y de la especial valoración que se hizo - en un momento de la historia-, de los vínculos que sustentan la familia, como se desprende de la somera referencia a la evolución histórica del orden jurídico que hemos señalado; que no necesariamente acompañó al fenómeno social y al reconocimiento de la familia natural, pero que sirve para mostrarnos la ingenuidad de algunas simplificaciones y cómo las teorías que se apoyan en una visión de la vida no alcanzan a la permanencia de la conducta. De allí que las relaciones entre la transformación de las parejas y de la familia y las transformaciones sociales no puedan ser explicadas en términos simples y únicos sino que deban ser resueltas en el seno de una cultura y en sus relaciones con esa cultura.

Por lo expuesto, solicito de mis pares me acompañen con su voto positivo al presente proyecto de ley.

Sonia M. Escudero.

(II)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

ARTÍCULO 1.- Modifíquese Art. 80 inciso 4 del Código Penal el cual quedara redactado de la siguiente forma:

“ARTICULO 80.- se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare:

1. a su ascendiente, descendiente o cónyuge, sabiendo que lo son;
2. con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso;
3. por precio o promesa remuneratoria;
4. por placer, codicia, odio racial o religioso, o violencia de genero;
5. por un medio idóneo para crear un peligro común;
6. con el concurso premeditado de dos o mas personas;
7. para preparar, facilitar, consumir u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para si o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito.

Cuando el caso del inciso 1 de este artículo, mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho a veinticinco años.”

ARTICULO 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ana M. Corradi de Beltrán.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

La violencia de género o violencia contra la mujer, es toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito publico como en el privado, basada en una relación desigual de poder,

afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal por su condición de tal.

Recientemente el Congreso de la Nación, por iniciativa de la Sra. Presidenta de la Nación, sancionó la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Dicha ley fue pensada en concordancia con los derechos reconocidos como Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Esta iniciativa permitirá al sistema penal hacer visible lo que hasta ahora es invisible: la conducta del homicidio, las causas y formas en las que se efectuó. Facultará a su vez desterrar la impunidad, el silencio y la indiferencia con los que la sociedad y el sistema judicial enfrentan los crímenes de mujeres. Es por ello que se solicita la incorporación de este agravante para sancionar la pérdida de la vida de una mujer bajo circunstancias relacionadas directamente con la construcción de género.

Tipificar la violencia de género significaría la comprensión social de la violencia contra las mujeres y un avance en cuanto a la precisión de las personas efectivamente afectadas: las mujeres.

En la práctica, la figura de emoción violenta es utilizada por los agresores como defensa, constituyéndose en un atenuante a su acción y disminuyendo la sanción penal.

En Argentina una mujer muere cada tres días a manos de su pareja, ex pareja o integrante de su familia y las víctimas de acción violenta por parte de sus esposos o ex parejas aumentan cada día más.

A pesar de las denuncias policiales por el maltrato sufrido, siguen muriendo mujeres. El año pasado se dieron a conocer 247 asesinatos en todo el país. La mayoría de las víctimas tenían entre 13 y 65 años.

Datos oficiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires revelan que entre enero y septiembre de 2007 se recibieron 7.876 denuncias telefónicas por violencia familiar, mientras que en la provincia de Buenos Aires la cifra se dispara a 18.498 llamadas en el primer semestre del mismo año.

De 260 mujeres y niñas que fueron asesinadas en 2010, once de ellas fueron incineradas, con un incremento notable de estos casos en un 10% respecto del año 2009. Existe un incremento general de la violencia hacia las mujeres, en lo que va del año 2011 hemos podido observar varias víctimas por incineramiento.

Vemos el aumento de este delito año a año, pues bien, la vida de una sola mujer y el bien jurídico que se trastoca vale, sin lugar a dudas, la incorporación de este agravante en nuestro Código Penal.

La violencia de género constituye una epidemia y es la expresión más contundente de la desigualdad entre varones y mujeres porque durante muchos años no se reconoció la violencia intrafamiliar como un delito y también se silenciaron otras formas de violencia contra la mujer.

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer es violencia de género, y es el fin de este proyecto tutelar a través de la incorporación en el inciso 4 de la expresión violencia de género.

El estado actual de los sistemas penales muestra sus características antivictimológicas en función de las garantías del victimario y de los mitos del imaginario social. Además en todo proceso penal corresponde demostrar la efectiva configuración del tipo delictivo, hecho éste que motiva la presente iniciativa.

Si bien es cierto que debería existir un cambio de mentalidades que desnaturalicen la violencia de género, es indispensable la inclusión del tipo penal para darle lógica al correlato de la sanción. Ya que la norma moral carece de ella, desprotegiendo a la víctima de la intervención judicial.

No cabe duda que la obligación de cada Estado de actuar frente a la violencia de género, comprende la adopción de las medidas adecuadas para hacer frente a esta situación.

En busca del trato igualitario para las mujeres, la deslegitimación de la violencia contra ellas, la remoción de patrones culturales estereotipados y el acceso a la justicia de las mujeres maltratadas son entre otros los basamentos de la presente iniciativa.

La modificación al artículo 80 inciso 4 si bien contiene un fin en si mismo que es el agravar el delito de homicidio cuando de ello resultare violencia de genero, la oportunidad también vale ya que existe basta jurisprudencia reciente donde el juez aplica, para agravar otras figuras del código penal, los incisos del artículo mencionado. Por lo tanto la presente incorporación será tomada en cuenta a los fines de calificar otros delitos del Código Penal como lo son el artículo 90, 91, 142 bis y 170, entre otros.

Por todo lo expuesto, y porque considero indispensable tomar las medidas pertinentes tendientes a garantizar los derechos de todas, es que solicito a mis pares que me acompañen con la presente iniciativa.

Ana M. Corradi de Beltrán.

(III)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 80 del Código Penal, que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 80.- Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare:

1º A su ascendiente, descendiente, cónyuge, pareja o conviviente, sabiendo que lo son, o persona con quien tenía o tuvo relación íntima o afectiva.

2º Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso.

3º Por precio o promesa remuneratoria.

4º Por placer, codicia, odio racial, religioso o de género.

- 5º Por un medio idóneo para crear un peligro común.
- 6º Con el concurso premeditado de dos o más personas.
- 7º Para preparar, facilitar, consumir u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito.
- 8º A un miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, por su función, cargo o condición.
- 9º Abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario.
- 10 A su superior militar frente a enemigo o tropa formada con armas.
- Cuando en el caso del inciso primero de este artículo, mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho a veinticinco años.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

Liliana B. Fellner.-

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La violencia contra mujeres y niñas en sus distintas modalidades tales como lesiones, abusos sexuales y homicidios se encontraba hasta no hace mucho tiempo oculta en las sociedades modernas. Es recién en la segunda mitad del siglo XX que las mujeres a partir de sus experiencias comienzan a visibilizar socialmente estas cuestiones considerándolas como reflejo de la asimetría existente en las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Esta asimetría resultaba a la vez funcional para perpetuar la subordinación y desvalorización de lo femenino frente a lo masculino.

El término “femicidio” para referir la muerte de mujeres por el hecho de ser tales fue utilizado por primera vez por Diana Russell en el año 1976, en oportunidad de declarar ante el tribunal internacional sobre crímenes contra mujeres. La circunstancia de nombrar estos crímenes con una denominación particular y específica representa en sí mismo un avance ya que es el puntapié inicial para visibilizar el problema y luego abordarlo analíticamente para comprender sus causas, dimensiones y efectos.

En este sentido, es dable afirmar que “femicidio” es un neologismo que tiene una génesis más bien política y consiste en el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer motivado por desprecio, odio, placer o sentido de propiedad sobre ella.

En realidad el femicidio es solo una parte de la violación sistemática de los derechos humanos de niñas y mujeres en razón de su condición de tales. Opera, a su vez, como forma de control y dominación hacia todas las mujeres en tanto género. Es así la expresión extrema de la violencia de género ejercida por hombres contra mujeres y niñas, naturalizada en la cultura y tolerada, hasta no hace mucho tiempo por el estado y la sociedad.

El uso del concepto de femicidio difiere en algunos autores en relación al alcance que se otorga a dicha herramienta analítica para dar cuenta de la violencia contra las mujeres como componente de las relaciones asimétricas de poder entre los géneros, y su potencialidad inclusiva para las distintas situaciones, modos y contextos en que ocurren estos crímenes de género.

No obstante ello, existe un consenso general en cuanto a admitir que siempre que se hable de femicidio, se está haciendo referencia al asesinato de una mujer por un hombre, por el simple hecho de su condición de mujer.

La comprensión política del femicidio redimensiona la violencia de género contra las mujeres como un asunto público que comprende a la sociedad entera. Asimismo, alude a la obligación que surge en cabeza de los estados de detener la situación sistemática y reiterada de violencia a la que son sometidas las mujeres.

La investigación de los asesinatos cometidos contra mujeres ha permitido establecer distintas clases de femicidio. Ellos son:

a) Femicidio íntimo: es aquel sobre el cual se registran mayor cantidad de casos y se da en el ámbito de lo privado, en el espacio de las relaciones íntimas. Son aquellos asesinatos cometidos por hombres con quien la víctima tenía o tuvo una relación de convivencia, familiar, íntima u otras afines.

Habitualmente estos crímenes se presentan como la culminación de actos de violencia ejercidos durante años contra las mujeres. Los motivos pueden ser celos, odio, una discusión, pero siempre el sentido de propiedad y los afanes de los hombres por dominar a las mujeres y controlarlas.

Los victimarios suelen ser el amante, novio, esposo, padre, conviviente, entre otros. Son hombres violentos que ven a las mujeres como de su propiedad y creen que tienen derecho a matarlas.

b) Femicidio sexual: se denomina así en atención al ámbito relacional en el que ocurre o la causa que lo determina. Se refiere a los homicidios cometidos por hombres con quienes las víctimas nunca tuvieron relaciones íntimas, familiares o de convivencia. Estos casos de femicidio involucran frecuentemente el ataque sexual a la víctima.

c) Femicidios vinculados: Algunos especialistas en la temática han articulado un concepto complementario del anterior. Se trata del “femicidio vinculado” con el cual se tipifican dos situaciones diferentes entre sí pero que a su vez se vinculan estrechamente con aquel concepto.

Se trata de acciones del femicida, que le sirven para consumar su fin y consiste en matar, castigar o destruir psicológicamente a la mujer sobre la cual se ejerce la dominación. Las dos variantes que pueden presentarse son:

- 1) Personas que fueron asesinadas por el femicida, al intentar impedir el femicidio o que quedaron atrapadas “en la línea de fuego”;
- 2) O bien personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer, que fueron asesinadas por el femicida con el objeto de castigar y destruir psíquicamente a la mujer.

En este contexto resulta oportuno poner de manifiesto datos estadísticos que contribuyen a describir el problema. El Observatorio de Femicidios en Argentina de la Sociedad Civil “Adriana Marisel Zambrano” ha realizado un trabajo de investigación correspondiente al período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2010, en base a datos recopilados de las agencias de noticias Télam y DyN y 120 diarios de distribución nacional o provincial.

Conforme a aquella, en el año 2010 se registraron 260 femicidios simples y femicidios vinculados de mujeres y niñas; y 15 femicidios vinculados de hombres y niños.

Las cifras son por demás elocuentes para dimensionar la problemática, a lo que se adiciona que ellas aumentan sostenida y pronunciadamente, año tras año. En este sentido basta con señalar que el incremento del año 2010 con relación al 2009 es de un 12.5%.

A su vez, estas cifras no representan el total de casos ya que hay situaciones que impiden la tipificación de los decesos como femicidio. Tal el caso de las mujeres que ingresan de urgencia a la guardia de un hospital con evidencia de violencia del tipo descripto, pero al fallecer en sus certificados de defunción figura muerte por paro cardiorrespiratorio u otro causal, invisibilizando la violencia que generó el cuadro traumático.

Otro ejemplo es el caso de mujeres que aparecen en las noticias como muertas por suicidio, pero que han padecido previamente una situación de violencia sexista en sus vidas.

Con relación a la temática abordada en este proyecto, existen diversas normas, tanto de índole internacional (convenciones, pactos y declaraciones) como nacional.

En cuanto al primer aspecto, si bien todos los Pactos, Convenciones y Declaraciones que tienen jerarquía constitucional en nuestro país abordan aunque sea tangencialmente cuestiones relativas a los derechos humanos de las mujeres, lo cierto es que a partir de la década del 70', comienza el debate y la creación de distintos instrumentos internacionales que abordan las distintas problemáticas que atañen específicamente a las mujeres por su condición de tales.

Claro que esta tendencia comenzó por los temas más generales y a la vez urgentes en torno al reconocimiento de los derechos de las mujeres. En este sentido, el primer paso era consagrar o plasmar la igualdad real de derechos entre hombres y mujeres.

Por esta razón puede decirse que el primer hito estuvo dado por la modificación del nombre de la "Declaración Universal de los Derechos

del Hombre” por el de “Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

A partir de 1975 se iniciaron las conferencias mundiales sobre la mujer, y al poco tiempo –en 1979- la asamblea general de Naciones Unidas aprobó la “Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer”.

El fundamento de la convención se basa en la "prohibición de todas las formas de discriminación contra la mujer". Además de la exigencia de que se reconozca a la mujer derechos iguales a los de los hombres, la convención prescribe las medidas que han de adoptarse para asegurar que en todas partes las mujeres puedan gozar de los derechos que les asisten.

Asimismo, y como una consecuencia del art. 17 de dicha convención, se creó Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, cuya finalidad es examinar los progresos realizados en la aplicación de sus disposiciones.

Una vez que comenzó a avanzarse en la no discriminación de la mujer, se hizo evidente la necesidad de abordar la problemática de la violencia contra aquellas. Así fue que en año 1993 y en el marco de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, se aprobó la “Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

En virtud de esta declaración, se considera a la violencia contra la mujer como una violación de los derechos humanos y como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer.

Finalmente, otro hito destacado en la materia estuvo dado en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), con la aprobación de la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”.

Esta convención surge del convencimiento de que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. A su vez, se considera que la violencia contra la mujer es una ofensa a la

dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.

El instrumento entiende por violencia contra la mujer “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

Es importante explicitar que, tanto la “Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer” –que tiene jerarquía constitucional en virtud del art. 75 inc. 22 de la CN- como la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”, generan la obligación para el estado de cumplir y hacer cumplir sus disposiciones y adoptar las medidas internas en los tres poderes para adecuar normas e instituciones a sus preceptos.

El Congreso de la Nación ha ido sancionando gradualmente distintas normas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.

En el año 1994 se sancionó la ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar. Como se desprende de su nombre, la ley no aborda de manera específica la violencia contra la mujer, sino que contiene disposiciones de carácter general en torno a la protección del núcleo familiar.

Posteriormente, en el año 2009, el congreso sancionó la ley de protección integral de las mujeres. Las disposiciones de la ley son de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República, con excepción de las disposiciones de carácter procesal.

Lo cierto es que no obstante los avances que significaron estas normas, resulta necesario tipificar con énfasis en nuestro código penal la figura del femicidio, atento al continuo crecimiento de esta clase de homicidios.

La redacción actual del art.80 del código penal, en su inciso primero, establece que “se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare:

1º A su ascendiente, descendiente o cónyuge, sabiendo que lo son”.

Es decir, se contempla como circunstancia agravante del homicidio la relación de parentesco en el grado señalado.

Sin embargo, esta previsión no resulta suficiente para comprender el homicidio de personas con las que se mantiene relaciones que no son de parentesco sino afectivas o íntimas siendo necesario cubrir esta laguna normativa, dado el crecimiento acelerado de este tipo de crímenes que se observa en nuestra sociedad, especialmente contra las mujeres.

Por ello, proponemos incorporar como agravantes del homicidio, junto a las ya existentes, dos circunstancias nuevas. Una de ellas se incorpora al inc. 1 del art. 80 y se da cuando el homicidio se comete contra "...pareja o conviviente, sabiendo que lo son, o persona con quien tenía o tuvo relación íntima o afectiva."

Por otro lado, y para atender al caso específico del femicidio, se incorpora al inc. 4 del art. 80 del código penal, se agrega a los supuestos ya previstos (placer, codicia, odio racial o religioso), el de "odio de género".

Esta iniciativa busca constituirse en un aporte a la discusión que indefectiblemente debe darse en el Congreso de la Nación sobre este tema tan actual como trascendente.

Para concluir me gustaría citar a Amnistía Internacional, que ha afirmado que "la violencia contra las mujeres es la mayor atrocidad cometida contra los derechos humanos en nuestro tiempo. Desde que nacen hasta que mueren, tanto en tiempos de paz como de guerra, las mujeres se enfrentan a la discriminación y la violencia del estado, la comunidad y la familia".

Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación del presente proyecto.

Liliana B. Fellner.-

(IV)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1°.- Sustitúyese el artículo 80 del Código Penal de la Nación por el siguiente:

“Artículo 80.- Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare:

1° A su ascendiente o descendiente, sabiendo que lo son.

2° A su cónyuge o ex cónyuge, conviviente o ex conviviente, o a una mujer con la que mantenga o haya mantenido una relación de afectividad.

3° Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso.

4° Por precio o promesa remuneratoria.

5° Por placer, codicia, odio racial o religioso.

6° Por un medio idóneo para crear un peligro común.

7° Con el concurso premeditado de dos o más personas.

8° Para preparar, facilitar, consumir u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito.

9° A un miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, por su función, cargo o condición.

10. Abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario.

11. A su superior militar frente a enemigo o tropa formada con armas. Cuando en el caso de los incisos primero y segundo de este artículo, mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho a veinticinco años.”

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Blanca I. Osuna.- Nanci M. A. Parrilli. -Marina R. Riofrío. -

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Durante los últimos años ha habido importantes progresos en la elaboración de normas tanto internacionales como nacionales para hacer frente a la violencia contra la mujer entendida como todo acto de violencia por motivos de género que se dirija contra una mujer porque es una mujer o que afecte desproporcionadamente a las mujeres.

Es necesario destacar al respecto la elaboración en el marco de las Naciones Unidas de la Convención para Erradicar la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aprobada en nuestro país en el año 1985 a través de la ley 23179 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer del año 1995 (Belem do Pará – Brasil) que fuera aprobada por ley 26432 del año 1996.

En el orden nacional se dictó en el año 2009 la ley 24685, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres con el objeto de promover y garantizar “El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia”. Dicha ley define las distintas formas y modalidades en las que se puede dar la violencia contra las mujeres, nombra al Consejo Nacional de la Mujer como organismo rector, encargado de la elaboración del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y la implementación de un registro de interjurisdiccional e interinstitucional de situaciones de violencia contra las mujeres y crea el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres.

En este mismo sentido la Corte Suprema de Justicia creó por medio de la Acordada 13/2009 la Oficina de Violencia Doméstica con dependencia directa de la Vicepresidencia del tribunal.

Sin embargo la eliminación efectiva de toda forma de violencia y discriminación contra la mujer implica un proceso muy largo, que aún no ha concluido. El camino desde la familia patriarcal en la cual el hombre tenía derecho de propiedad sobre los bienes y las personas que la integraban hasta la actualidad es sumamente complejo y lleno de marchas y contramarchas.

En los últimos tiempos los medios de comunicación han venido reflejando el fenómeno creciente del femicidio, término así como el de feminicidio, acuñados recientemente con el objetivo de poner de resalto y dar cuenta de la especificidad de los homicidios que tienen su

razón de ser en una violencia basada en la inequidad de género. Estos nuevos términos a la vez expresan el carácter social y generalizado de este tipo de violencia y cuestionan los argumentos que tienden a disculpar y a representar a los agresores como “locos” o a concebir estas muertes como “crímenes pasionales”. Este último concepto no es inocente, en tanto es sostenido por la idea de que el criminal ha actuado poseído por fuerzas exteriores, inmanejables por él —el amor, la pasión, la venganza—, que la situación lo sobrepasa, que ha cometido actos que no controla. Explicaciones todas estas que no hacen más que reforzar la impunidad de los femicidios. Es necesario entonces que se haga visible y se comprenda su gravedad, para lograr una punición efectiva.

En este marco es que se dan los llamados femicidios íntimos, esto es, cometidos por varones con quienes las víctimas tenían o tuvieron una relación de intimidad, familiar (en muchos casos de convivencia o siendo ya sus ex parejas). Estos femicidios se inscriben en relaciones de dominación patriarcal. La violencia es constitutiva de toda política de opresión y sirve, en el caso de la opresión de género, para reafirmar la posición de inferioridad sexual y social de las mujeres.

Dicho en otros términos, cuando un hombre mata a una mujer con la que lo une un vínculo de afectividad, este crimen se inscribe en el cuadro de una relación de dominación masculina y de subordinación femenina. Se trata de un crimen cometido con la finalidad de controlar a la mujer, a quien el hombre ha convertido en su objeto de posesión. Por lo tanto, el recurso de la violencia por parte del hombre es instrumental y no constituye una pérdida de control, sino más bien una toma de control.

En los delitos de femicidio podemos decir que el primer factor que motiva a los hombres a matar a su esposa, sería el temor de perder su acceso sexual exclusivo hacia su mujer. En este sentido, es particularmente en ocasión de una ruptura o de una separación que los hombres se hallan inclinados a matar. En investigaciones realizadas en Estados Unidos sobre hombres que habían asesinado a sus mujeres se concluyó que en dos de cada tres casos los hombres habían cometido su crimen porque percibían el comportamiento de sus mujeres como una amenaza a sus prerrogativas sexuales y a su posición dominante en el interior de la pareja.

Dicho en palabras de la psicoanalista Joan Rivière: "...El hombre que ha perdido a la mujer que ama, o que piensa que la va a perder, no reacciona solamente ante la pérdida del amor que ella le da o a la privación de su posesión, este amor y esta posesión son a sus ojos pruebas de su propio valor." Así, ante una presunta amenaza o ante la decisión por parte de la mujer de no continuar la relación sentimental con el hombre, éste no puede tolerarlo y siente la necesidad de terminar con la vida de su mujer:

Dado que el flagelo del femicidio, en particular el del femicidio íntimo, tiene alcance mundial, los distintos países han tratado de dar respuesta al mismo a través de su legislación. Cabe mencionar a España con su Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, a Costa Rica, a Guatemala, y recientemente a Chile, como países que han encarado esta regulación

Ahora bien, nuestro Código Penal contiene una incipiente incriminación del femicidio íntimo en el agravante del homicidio del inciso primero del artículo 80. Pero este agravante se encuentra limitado por referirse exclusivamente a la muerte del cónyuge. En consecuencia quedan afuera de la incriminación tanto los ex cónyuges como los casos de concubinato o los de parejas que no han convivido. En este sentido el legislador penal parece seguir el criterio de Vélez Sarsfield en el Código Civil que silencia la existencia del concubinato, con lo cual lo priva de efectos jurídicos. Ahora bien, más allá del criterio abstencionista adoptado por la legislación civil el trato desigualitario no puede ser admitido en el ámbito del derecho penal y en la punición de conductas disvaliosas que tienen como rasgo saliente la violencia insita en una convivencia sea marital o no.

Es por estas razones que han existido desde hace tiempo numerosos proyectos legislativos de modificación del inciso primero del artículo 80 para incluir en el mismo el caso del concubinato, proyectos que no llegaron a tener sanción definitiva.

Creemos que las actuales circunstancias que nos están marcando la existencia de numerosos casos de femicidios cometidos en el marco de las relaciones de pareja imponen una modificación urgente al inciso primero del Código Penal que permita incorporar tanto a los casos de concubinato como los casos de los ex cónyuges que – como marca la jurisprudencia penal – no están contemplados.

Pues la situación de riesgo y de violencia potencial no solo encuentra fundamento en el vínculo presente sino también en el vínculo pasado, teniendo en cuenta que en las relaciones humanas no es tarea sencilla establecer cuando una relación ha terminado.

Por otra parte creemos también que es necesario dar una señal que “sexualice la respuesta punitiva” penalizando también al que mate a una mujer con la que el homicida “mantenga o haya mantenido una relación de afectividad”. Incorporamos aquí a las relaciones que no han llegado a una situación de convivencia pero que claramente son el marco de la violencia que llevó al homicidio, limitando la punición agravada para el caso de que la víctima sea mujer.

Somos conscientes de que las estadísticas disponibles avalan la necesidad y la urgencia de esta reforma al Código Penal.

Somos conscientes también de que de lo que se trata es de modificar conductas y no solamente normas. Pero la tarea de modificar conductas es una tarea de generaciones, y las mujeres que están siendo quemadas por sus novios y parejas requieren una respuesta hoy, y esos novios y parejas deben tener una señal de que crímenes semejantes no quedarán impunes.

Esto porque entendemos que la impunidad de la violencia contra la mujer agrava los efectos de dicha violencia como mecanismo de control de los hombres sobre las mujeres. Cuando el Estado no responsabiliza a los autores de actos de violencia y la sociedad tolera expresa o tácitamente a dicha violencia, la impunidad no sólo alienta nuevos abusos, sino que también transmite el mensaje de que la violencia masculina contra la mujer es aceptable o normal. El resultado de esa impunidad no consiste únicamente en la denegación de justicia a las víctimas, sino también en el refuerzo de las relaciones de género reinantes y en la reproducción de las desigualdades que afectan a las demás mujeres.

Por estas razones solicito de mis pares me acompañen en la sanción de este proyecto de ley.

Blanca I. Osuna.- Nanci M. A. Parrilli. -Marina R. Riofrío. -

(V)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1.- Modificase el inciso 1° del artículo 80 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 80: Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare:

1°): a su ascendiente, descendiente o hermano, sea el parentesco biológico o por adopción, a su cónyuge o concubino sabiendo que lo son. Entendiéndose por concubinato la situación de hecho en que se encuentran dos personas que hacen vida marital sin estar unidos en matrimonio por un lapso de 5 años.

Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

María J. Bongiorno.-

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Es de vital importancia hacernos eco de la necesidad de adecuar las normas a una realidad que demanda reconocimientos legales para un funcionamiento social eficiente.

Es en este caso que considero necesaria la adecuación del código penal en su inciso 1, artículo 80.

En él se establece el agravante por el vínculo en el delito de homicidio.

De su actual texto surge la omisión del legislador de incluir dentro de las figuras tomadas como vínculo familiar la del hermano y el concubino y dejar a la interpretación si se incluye el vínculo por adopción.

Históricamente el concepto de parricidio se encuentra en las XII Tablas donde se refiere a la muerte de los padres realizada por los hijos. Así se ha definido a lo largo de la historia con un concepto mas abarcativo o restrictivo.

En nuestro Código penal y remitiéndonos al artículo ut supra mencionado no se incluye al homicidio realizado por el hermano y obvia especificar vínculo natural o por adopción, en caso del hermano estaríamos hablando de fratricidio. Tampoco se considera a los realizados por los concubinos, en nuestra propuesta se ha equiparado, justamente, a la figura del cónyuge.

Dos agravantes que a la luz de la realidad y su evolución social en el concepto de familia quedan perfectamente incluidos dentro del concepto colectivo de vínculo familiar.

Atentar contra la vida de quien está unido por un vínculo sanguíneo no implica dejar de lado aquel vínculo que sin ser sanguíneo –adoptivo, cónyuge o concubino, se une de igual manera afectivamente a quien atenta contra su vida.

Núñez describe “la violación por el autor de los deberes de respeto y protección emergentes del vínculo de sangre o matrimonial; 1]-.Dayenoff dice: “el fundamento del parricidio se encuentra en la peligrosidad del homicida, el cual mata despreciando el vínculo de sangre. 2]-

Tejedor en su comentario respecto al parricidio expresaba: “la terrible responsabilidad del parricidio está basada en que el parricida ha desoído la voz poderosa que le mandaba respetar a su padre, en que ha desconocido el sentimiento sagrado que todos los hombres encuentran en su corazón, en que holla un deber no perecedero como el reconocimiento, sino eterno en la naturaleza” 3]-.

He aquí una muestra de posiciones en que la doctrina penal expresa la no inclusión de otro vínculo que no sea el sanguíneo.

Sin caer en supuestos e interpretaciones entiendo que la ley es efectiva cuando es clara en su letra y en su espíritu y este es el objetivo que se pretende con la inclusión de las palabras “biológico o por adopción “.

Volviendo a la importancia de la inclusión propuesta, planteemos algunas hipótesis que nos podrían servir de ayuda a la comprensión de necesidad de esta reforma, siguiendo la interpretación de la doctrina imperante.

En el caso de la inclusión del hermano biológico o por adopción ¿como estaría parado ante la ley, actualmente, quien cometiera homicidio de su padre biológico siendo hijo extramatrimonial y quien de igual manera fuera autor del homicidio de su padre adoptante?

Las consecuencias son claras e ilógicas. Veámoslo en un caso hipotético

El hijo extramatrimonial con lazos sanguíneos pero no afectivos que son aquellos que se generan con la diaria convivencia y trato cotidiano , en este caso el homicida sería alcanzado por el mencionado artículo 80 inciso 1) como vimos : homicidio agravado por el vínculo- ya que el vínculo sanguíneo existe. En cambio el hijo que hubiera sido adoptado y seguramente habría convivido toda su vida bajo el resguardo familiar paradójicamente se le aplicaría el tipo penal de homicidio simple, sin poder alegarse tal agravante, que sin duda fácticamente existe.

Quiere decir que un hijo extramatrimonial estaría alcanzado por un tipo penal diferente que un hijo adoptivo. A la luz de la interpretación real carece de sentido.

Ahora bien corresponde referirnos al cónyuge o concubino.

Clara esta la situación del cónyuge en la tipificación penal que lo incluye como lo denominamos parricidio impropio, pero ¿qué sucede entonces con el concubino?

Definimos Concubino como: la situación de hecho en que se encuentran dos personas que hacen vida marital sin estar unidos en matrimonio por un lapso de 5 años.

La jurisprudencia ha ido reconociendo al concubinato algunos derechos equiparables al vínculo matrimonial. Esto ha sido en fallos donde se le ha reconocido legitimación activa en causas

indemnizatorias por muerte del conviviente. Esta es la tendencia en la justicia actual. 4]

En locaciones urbanas ha habido un avance toda vez que se ha reconocido una desprotección para quien no podía suceder en la locación por no haber sido firmante del contrato de locación.

En materia de seguridad social podría decirse que es el campo donde más se destaca el reconocimiento a esta institución donde se le ha reconocido beneficiaria a la concubina quinquenal o a la que acreditara una convivencia por un término menor si de dicha unión existiera descendencia. En igual sentido la jurisprudencia se ha expresado .- 5]-

Ahora bien volvamos a las hipótesis que nos pueda demostrar de alguna manera la desafortunada redacción del artículo 80 inciso 1.

Si una pareja ha convivido un prolongado periodo de sus vidas, podríamos decir 20 años de sus vidas juntos, sin mediar matrimonio y uno de ellos comete el delito de homicidio sobre su concubino, este sería alcanzado por la tipificación del artículo 79 es decir por homicidio simple.

Y si por otro lado nos encontramos con una pareja legalmente casada que ha convivido por 6 años y alguno de los cónyuges comete homicidio sobre el otro, aquí si se aplicaría el agravante del artículo 80 inc. 1. No así si hubiere mediado divorcio vincular.

Analizando los ejemplos que anteceden ¿no habría una desproporción en la pena?

No cabe duda que el bien jurídico protegido es la familia.

Todos coincidimos en ese concepto básico del bien jurídico protegido y se manifiesta castigando su violación mediante la figura penal del agravante.

Pero es necesario contemplar la ampliación tanto de los hermanos como de los concubinos quienes surgen mediante un reconocimiento social como constituyentes de familia tanto así como los cónyuges.

Es así que concluyendo con lo expresado me parece apropiada una definición de familia que considero sencilla en sus palabras pero enriquecedora en su contenido, definición que quisiera compartir y aquí transcribo :

Familia : "Grupo humano integrado por miembros relacionados por vínculos de afecto, sangre o adopción" 6]

En pocas palabras expresa un concepto que la realidad nos obliga a incorporar y como legisladores adecuar la letra de la ley a este nuevo concepto de familia.

Es por todo lo aquí expuesto solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.

1 Núñez, Ricardo C., Manual de Derecho Penal. Parte especial, Córdoba, Marcos Lerner Editora, 1988, p.49.

2) Dayenoff, David E., Código Penal. Concordancias, comentarios, jurisprudencia, esquema de defensa, Bs.As., A-Z, 1998, sexta edición , p.164.

3)López Bolado, op. cit. p.34.

4) "Corresponde hacer lugar a la indemnización del daño moral de la concubina, dado el hecho de haberse tratado de una relación de convivencia estable, prolongada en el tiempo, con un alto grado de certeza sobre su proyección futura, a partir de la cual se compartió no sólo el hogar sino la vida en todos los aspectos, y cuyo fruto ha sido el hijo nacido de ambos, que es criado por la reclamante juntamente con los otros hijos del anterior matrimonio de la víctima. La solución del artículo 1.078 del Código Civil es, en este caso particular, disvaliosa, pues con un fundamento apodíctico, priva de la indemnización a quien, en un nexo causal con el obrar ilícito imputado al demandado, da muestras de la existencia de un menoscabo espiritual. Esta limitación atenta contra la noción de familia, que conceptualmente excede a la constituida desde bases matrimoniales, puesto que comprende también a la que, originada en una unión de hecho, esto es, sin estar constituida legalmente, funciona como tal en la sociedad ... El artículo 1.078 del Código Civil resulta inaplicable en el particular, por resultar lesivo de derechos fundamentales y garantías de raigambre constitucional, como los son la protección integral de la familia y la igualdad ante la ley, en la certidumbre de que la muerte del compañero ha conculcado en la concubina un derecho proveniente de

su emplazamiento existencial, suficientemente acreditado a partir de la relación estable y prolongada mantenida con aquél y de la crianza de sus hijos...”.

Un plenario de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal aprobó la tesis según la cual "se encuentran legitimados los concubenarios para reclamar la indemnización del daño patrimonial ocasionado por la muerte de uno de ellos, como consecuencia de un hecho ilícito, en tanto no medie impedimento de ligamen" CNCiv. en pleno, 4-4-1995, ED diario del 20-6-1995. También la Ley de Contrato de Trabajo en su art. 269 reconoce el derecho a indemnización por muerte a la mujer que hubiese vivido públicamente con el trabajador.

5) CSN “Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar un nuevo fallo. Notifíquese y remítase con copia del precedente citado.

- Julio S. Nazareno (en disidencia). - Eduardo Moliné OConnor (en disidencia). - Carlos S. Fayt. - Augusto César Belluscio. - Adolfo Roberto Vázquez (por mi voto). - Enrique S. Petracchi. - Antonio Boggiano (en disidencia). - Gustavo A. Bossert (según su voto). - Guillermo A. F. López (en disidencia). POR SU VOTO : Dr. Vázquez “Que la inclusión de la concubina del causante, que no desplaza a la viuda a quien el beneficio le había sido acordado con anterioridad sino en el porcentaje legal, resulta justa y coherente con el principio de seguridad social y la finalidad de protección integral de la familia que establece el art. 14 bis de la Constitución Nacional, sin que pueda considerarse lesionado el derecho reconocido a la cónyuge supérstite.”

6] RIOS, José Antonio. "Vocabulario básico de orientación y terapia familiar", editorial CCS, Alcalá Madrid. s/a. p.148

María José Bongiorno

(VI)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

ARTICULO 1º: Modifíquese el artículo 80 del C.P el que quedara redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 80. - Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare:

1º A su ascendiente, descendiente o con quien esté o haya estado ligado como cónyuge, conviviente o a través de cualquier otra relación de pareja, sabiendo que lo son.

2º Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso.

3º Por precio o promesa remuneratoria.

4º Por placer, codicia, odio racial, religioso o de género.

5º Por un medio idóneo para crear un peligro común.

6º Con el concurso premeditado de dos o más personas.

7º Para preparar, facilitar, consumir u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito.

8º A un miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, por su función, cargo o condición. (Inciso incorporado por art. 1º de la [Ley N° 25.601](#) B.O.11/6/2002)

9º Abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario. (Inciso incorporado por art. 1º de la [Ley N° 25.816](#) B.O.9/12/2003)

10º A su superior militar frente a enemigo o tropa formada con armas. (Inciso incorporado por art. 2º del Anexo I de la [Ley N° 26.394](#) B.O. 29/8/2008. Vigencia: comenzará a regir a los SEIS (6) meses de su promulgación. Durante dicho período se llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre su contenido y aplicación)

11º A una mujer, en el marco de relaciones desiguales de poder, por su condición de tal.

Cuando en el caso del inciso primero de este artículo, mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho a veinticinco años.”

ARTICULO 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo

María de los Ángeles Higonet. –

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Un estado que no toma en cuenta las nuevas dinámicas y características de la conflictividad social y política es incapaz de cumplir la misión para la cual está constituido, principalmente en

cuanto a garantizar la vida y el bien superior, así como el disfrute de todas y todos sus habitantes, en condiciones de seguridad, dignidad y equidad.

Es por esto que traigo a estudio de mis pares el presente proyecto de ley para incorporar en nuestro código penal el delito de femicidio, con la convicción que la violencia contra las mujeres representa una violación a los derechos humanos y constituye uno de los principales obstáculos para lograr una sociedad igualitaria y plenamente democrática. Por tal motivo, he asumido el firme compromiso de promover la protección y la defensa de los derechos humanos de las mujeres y de contribuir a la erradicación de esta problemática, la cual representa la forma más grave y extrema de discriminación contra las mujeres.

El concepto y el potencial alcance de la figura de feminicidio es complejo, ya que engloba una serie de fenómenos que van desde la violencia sistémica y la impunidad, hasta el “homicidio de mujeres por el simple hecho de ser mujeres. De forma particular, en los últimos años, activistas y legisladores han vislumbrado la necesidad de tipificar al feminicidio como delito, siendo ésta una medida legal y política que entre otras podría contribuir a la erradicación de esta grave forma de violencia contra las mujeres.

Así, recientemente algunos países de la región, como Guatemala y Costa Rica, y Chile han tomado la delantera e incorporado en su legislación el tipo penal de femicidio. Por su parte, México y Paraguay tienen proyectos en estudio en sus parlamentos.

Las expresiones femicidio y feminicidio, encuentran su antecedente directo en la voz inglesa femicide, expresión desarrollada inicialmente en el área de los estudios de género y la sociología por Diana Russell y Jane Caputi a principios de la década de 1990. Estas autoras incluyen en este concepto las muertes violentas de mujeres que se ubican en el extremo de un continuum de violencia, que incluye muchas más formas que la que se da en el ámbito privado o íntimo. En efecto, ya desde esta primera formulación femicide surge como expresión para evidenciar que la mayoría de los asesinatos de mujeres por parte de sus maridos, novios, padres, conocidos y también los cometidos por desconocidos, poseen un sustrato común en la misoginia, crímenes que constituyen, a juicio de las autoras, “la

forma más extrema de terrorismo sexista, motivada por odio, desprecio, placer o sentimiento de propiedad sobre las mujeres”. Es, por tanto, un concepto que surge con una intención política: develar el sustrato sexista o misógino de estos crímenes que permanece oculto cuando se hace referencia a ellos a través de palabras neutras como homicidio o asesinato.

A pesar de hablarse principalmente de crímenes, la amplitud de este concepto queda expresada en el siguiente párrafo, uno de los más citados en diversas publicaciones y estudios sobre el tema:

“El femicidio representa el extremo de un continuum de terror anti-femenino que incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos, tales como violación, tortura, esclavitud sexual (particularmente por prostitución), abuso sexual infantil incestuoso o extra-familiar, golpizas físicas y emocionales, acoso sexual (por teléfono, en las calles, en la oficina, y en el aula), mutilación genital (clitoridectomías, escisión, infibulaciones), operaciones ginecológicas innecesarias (histerectomías gratuitas), heterosexualidad forzada, esterilización forzada, psicocirugía, negación de comida para mujeres en algunas culturas, cirugía plástica, y otras mutilaciones en nombre del embellecimiento. Siempre que estas formas de terrorismo resultan en muerte, ellas se transforman en femicidios”.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos se ha constituido en una de las principales herramientas utilizadas por los movimientos de mujeres en las últimas décadas para lograr la plena vigencia de los derechos de las mujeres en los diversos países del mundo. Dentro de esta rama del Derecho Internacional se ha producido una evolución sustancial, desde instrumentos adoptados e interpretados a partir de una mera igualdad formal entre hombres y mujeres, hacia instrumentos e interpretaciones que reconocen la desigualdad y la discriminación estructural de las mujeres y, en consecuencia, la necesidad de una completa revisión de la forma en que sus derechos son reconocidos y aplicados.

De esta manera, ya desde la adopción de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), incorporada a nuestra Carta Magna conforme el artículo 75 inc. 12, comienza a desarrollarse con fuerza una nueva área en el

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, enfocada en los derechos humanos de las mujeres.

Durante la primera fase tiene un fuerte énfasis en la discriminación de las mujeres –como lo refleja la propia CEDAW–, la cual es vista como el eje a partir del cual se articula la situación desmedrada de éstas en la mayor parte de las sociedades. Es interesante observar que este eje –la discriminación contra ellas–, de importancia clave en la evolución de los derechos de las mujeres, en la actualidad y con el paso de los años, ha experimentado un cambio sustancial en la forma en que se interpreta y comprende. Así, del análisis inicial sobre la discriminación a partir de la equiparación respecto de la forma en que eran entendidos los derechos de los hombres –que son tomados como paradigma– se ha dado paso a una interpretación a partir de la realidad de subordinación y sumisión que viven las mujeres en el mundo, sin que necesariamente exista un correlato directo o inmediato con un derecho de los hombres, es decir, no se trata ya de sólo lograr el reconocimiento de los mismos derechos que a ellos se les ha reconocido históricamente –derecho al voto, al trabajo, a la participación política, a la misma remuneración, etc.– sino también del reconocimiento de Derechos que surgen en la medida en que se consideran las características propias de la realidad de las mujeres, por ejemplo, en relación con cuestiones como la violencia y el aborto. Como bien ha relevado la Observación General No. 19 del Comité CEDAW, señalando que “la definición de discriminación incluye la violencia basada en el género, que es la violencia que se dirige a la mujer porque es una mujer o que afecta a las mujeres en forma desproporcionada y que esta violencia constituye discriminación en cuanto “impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”.

Especialmente a partir de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (de Belém do Pará, CBDP) que fue ratificada por nuestro país mediante la ley 24632 –en cuanto instrumento vinculante y específico– es claro a nivel del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que cabe responsabilidad al Estado por la violencia contra las mujeres cuando éste no ha adoptado todas las medidas adecuadas para su prevención, sanción y erradicación. Ello es así respecto de toda forma de violencia contra las mujeres, ya sea que se cometa en la esfera privada o pública, y más aún cuando se trata de violencia institucional ,

donde la responsabilidad del Estado está más directamente comprometida.

Es así que su artículo 7º dispone que “los estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:... c) incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso.

Más aún, en particular, respecto de la introducción en el ordenamiento jurídico de figuras como el femicidio, el Comité CEDAW ha recomendado específicamente su tipificación.

La sola interpretación de la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos sin discriminación a todas las personas es la que ha permitido fundamentar la constitucionalidad de estas normas especiales en los países en que ha sido cuestionada. Actualmente, en efecto, ya se cuenta con pronunciamientos de los tribunales constitucionales de Costa Rica y España, que avalan la existencia de normas que constituyen medidas penales específicas a favor de las mujeres en materia de violencia de género.

De esta manera, tanto el pronunciamiento del año 2005 de la Sala Constitucional de Costa Rica, que reconoció la constitucionalidad de la Ley para la Penalización de la Violencia contra las Mujeres, así como las primeras sentencias del Tribunal Constitucional español, que reconocen la constitucionalidad de las normas penales españolas, las cuales establecen sanciones diferenciadas y agravadas a la violencia contra las mujeres, constituyen dos ejemplos sobre cómo es que comienza a reconocerse también en el Derecho Penal interno de los distintos países la obligación del Estado de tipificar conductas dirigidas específicamente a enfrentar la violencia contra las mujeres.

No obstante, gran parte de la discusión en el ámbito penal en torno a los tipos penales específicos sobre violencia contra las mujeres radica en la cuestión de si ellos protegen un bien jurídico diferente que justificaría su existencia separada o independiente de otras figuras

penales similares y de carácter neutro, como el homicidio, la violación, el secuestro, las lesiones, etc.

En términos generales, respecto de la violencia contra las mujeres se ha dicho que afecta bienes jurídicos fundamentales como la vida, la integridad física y psíquica, la libertad sexual, etc. Sin embargo, el argumento de fondo que impulsa a la adopción de leyes penales especiales en esta materia es que la violencia contra las mujeres no sólo afecta la vida, la integridad física, psíquica o la libertad sexual de las mujeres, sino que existe un elemento adicional que se encuentra dado precisamente por la discriminación y subordinación implícita en la violencia de la cual ellas son víctimas.

Este elemento adicional es el que reconoce el Tribunal Constitucional español, al señalar que el legislador considera que “ciertas acciones son más graves, más reprochables socialmente, porque son expresión de una desigualdad y de una situación de abuso de poder, de una situación de discriminación en que se encuentran muchas mujeres”.

Proponemos una modificación del código penal y no una ley especial (lo que a la vez genera que estas normas muchas veces sean sólo conocidas por quienes trabajan específicamente en violencia contra las mujeres generando una especie de guetto normativo) para sancionar este delito en el convencimiento que dicha opción enfatiza el lugar que simbólicamente ocuparán estos delitos dentro del ordenamiento jurídico penal.

Así, las disposiciones que forman parte del Código Penal de un país se ubican, por excelencia, entre las más ampliamente conocidas y estudiadas—más que las leyes penales especiales—, por lo cual esta opción tiene una connotación estratégica destacable. Esto ha sido apuntado también por Ferrajoli, al sostener que en el Derecho Penal, para respetar el principio de legalidad, más que operar una mera reserva de ley, debiese operar una reserva de Código, de acuerdo con la cual ninguna norma penal o procesal penal pueda dictarse si no es mediante una modificación o integración de los Códigos, como manera de poner fin al caos normativo y restituir credibilidad tanto a la justicia como a la política (Ferrajoli Luigi, nota 80, p. 42).

La modificación que se propone intenta incorporar el llamado femicidio íntimo, modificando el inciso primero del artículo 80 y el femicidio

publico con el agregado de la palabra género en el inciso 4 y el nuevo tipo penal del inciso 11.

En el inciso primero se agrega como sujeto a los concubinos y a cualquier relación de pareja ya sea presente o pasada, esto es así ya que las estadísticas que se tienen sobre este tipo de crímenes en Argentina lo ameritan.

Tal como lo revela el informe del Observatorio de Femicidios de la Sociedad Civil "Adriana Marisel Zambrano" - una organización que realiza cada año el relevamiento y seguimiento de los casos mediante noticias publicadas en agencias de noticias y 120 diarios de distribución nacional y provincial ante la falta de estadísticas oficiales- desde el 1 de enero al 30 de junio de 2010, se registraron 126 femicidios de mujeres y niñas y otros seis denominados "vinculados" de hombres y niños.

De este total, las provincias con mayor incidencia fueron: Buenos Aires (43 casos), Santa Fe (12 casos), Córdoba (11 casos), Entre Ríos (9 casos), Misiones (6 casos), San Luis, Ciudad de Buenos Aires y Santiago del Estero (5 casos en cada una), Mendoza, Corrientes y Chaco (4 casos en cada una), Catamarca y Salta (3 casos en cada una), La Pampa, Tucumán, Río Negro, Chubut y Neuquén (2 casos en cada una), y La Rioja y Formosa (1 caso en cada una).

Del total de casos, 99 fueron cometidos en el círculo afectivo o cercano y sólo 27 sin vínculo aparente. De ellos, 43 fueron cometidos por ex esposos, concubinos o novios, y 38 por personas con las que sostenían relaciones afectivas actuales. La edad de mayor incidencia de las víctimas es entre los 19 y 50 años. Se determinó que en un 23% de los casos fueron baleadas, en un 21% golpeadas, en un 19% apuñaladas y en un 10% degolladas y estranguladas.

Se supo que al menos 18 de estas víctimas habían registrado denuncias y exposiciones policiales previas por violencia y 7 de los femicidas presuntamente son integrantes de las fuerzas de seguridad.

Según datos obtenidos de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las denuncias vinculadas con la violencia de género crecieron un 75% en dos años -pasando de 375 casos en el mes de enero de 2009 a 657

en el mes de enero de 2010-, y en un 78% de los casos las víctimas son mujeres.

En el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010, se registró un aumento del 12,5% con respecto al informe del año 2009:

260 Femicidios (mujeres y niñas)

15 Femicidios "Vinculados" de hombres y niños

Estas cifras son suficientemente elocuentes para fundar nuestra pretensión de incorporar la figura del femicidio al Código Penal.

Entendemos que la ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres para Prevenir Sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres, fue un importante primer paso que debe ser completado para mitigar este flagelo con la incorporación al Código Penal del delito de Femicidio.

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley-

María de los Ángeles Higonet. -

(VII)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º.- Sustitúyase el artículo 80 del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 80.- Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, del Código Penal al que matare:

- 1º A su ascendiente, descendiente o cónyuge, sabiendo que lo son.
- 2º Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso.
- 3º Por precio o promesa remuneratoria.
- 4º Por placer, codicia, odio racial o religioso.

5º Por un medio idóneo para crear un peligro común.

6º Con el concurso premeditado de dos o más personas.

7º Para preparar, facilitar, consumir u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito.

8º A un miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, por su función, cargo o condición. (Inciso incorporado por Art. 1º de la Ley NC 25.601

B.O.11/6/2002)

9º Abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario. (Inciso incorporado por Art. 1º de la Ley Nº 25.816 B.O.9/12/2003)

10º A su superior militar frente a enemigo o tropa formada con armas. (Inciso incorporado por Art. 2º del Anexo I de la Ley Nº 26.394 B.O. 29/8/2008. Vigencia: comenzará a regir a los SEIS (6) meses de su promulgación. Durante dicho período se llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre su contenido y aplicación).

11º.- A una mujer por su carácter de tal, utilizando para ello la violencia de género.

Cuando en el caso del inciso primero de este artículo, mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho a veinticinco años.

Artículo 2.- Modifícase el artículo 82 del Código Penal, el que quedara redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 82. - Cuando en el caso del inciso 1º del artículo 80 del Código Penal concurriese alguna de las circunstancias del inciso 1º y 11º del artículo 80 del Código Penal, la pena será de reclusión o prisión de diez a veinticinco años.

Artículo 3.- El Poder Ejecutivo llevara a cabo campañas masivas dirigidas a la población en general, a través de los medios de comunicación que le son propios, para prevenir y erradicar la violencia de género. Dichas campañas serán de difusión en todo el país y serán visibles en reparticiones públicas, escuelas, hospitales, salas de atención primaria, comisarías de la mujer, y en aquel sitio que considere adecuado para darlas a conocer.

Artículo 4.- Los textos escolares serán adecuados progresivamente en sus contenidos, para que de acuerdo a la edad de los educandos a los que van dirigidos, para que los modos de prevención y de denunciar los delitos de violencia de género sean materia de estudio.

Artículo 5.- El Poder Ejecutivo dispondrá el presupuesto necesario para atender el desarrollo de las campañas enunciadas en el artículo 3 de la presente ley.-

Artículo 6.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ada Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El femicidio o feminicidio, es el homicidio de personas del sexo femenino cometido a través de la violencia de género.

Este término nuevo nació como consecuencia del incremento incesante que se viene percibiendo en el mundo de asesinatos de mujeres y niñas, y en nuestro continente se aplicó por primera vez para referirse a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Ciudad de Guatemala.

También hay sospechas de que hay femicidios entre las mujeres indígenas canadienses, cientos de ellas han desaparecido o han sido asesinadas desde la década de 1980 en adelante.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la primera causa de muerte femenina a nivel mundial es la violencia de género en alguna de sus formas; ella tiene su origen en distintas cuestiones culturales, sociológicas y psicológicas que conciben a la mujer como un objeto que pertenece al varón, a cuyo lado debe permanecer sumisa.

Todos los días mueren mujeres a manos de sus maridos, parejas, novios, etc. Hay asesinatos a causa de trata y tráfico de personas, violencia doméstica, prostitución, pornografía, infanticidios en los

países en los que se prefiere a los niños, asesinatos de honor o falta de cuidados.

En nuestro país la Oficina de Violencia Domestica que depende la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte un incremento en las denuncias de violencia domestica.

Santiago del Estero, la provincia que represento, no escapa de esta problemática, al igual que muchas localidades del país como Cipoletti, Mar del Plata, Buenos Aires o Catamarca, los casos se multiplican y es necesario buscar soluciones desde la prevención, educación y sobre todo persiguiendo que los crímenes no queden impunes.

Vale recordar en este punto que en Chile y Guatemala, han sido pioneros y el femicidio ya se halla tipificado.

Con nuestra legislación actual un homicidio de los descriptos, hoy puede quedar atenuado por las causales previstas en el Código Penal o porque no existe vinculo matrimonial entre victima y homicida, ante tal evidencia va de suyo lo necesario de esta modificación.

Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento al tratamiento y posterior aprobación del presente proyecto de ley.

Ada Itúrriz de Cappellini.

(VIII)

PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados, etc...

ARTICULO 1º.- Incorpórase como artículo 41 quinties de la Ley 11.179 –Código Penal-, el siguiente texto:

“ARTICULO 41 quinties.- Cuando alguno de los delitos previstos en este Código se cometiera contra quien sea o haya sido cónyuge o concubino, la escala penal prevista para el delito de que se trate se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo, sin que ésta pueda exceder el máximo legal de la especie de pena que corresponda.

A los efectos de éste Código el concubinato es la situación de hecho en que se encuentran dos personas que hacen vida marital sin estar unidos en matrimonio durante un lapso mínimo de tres (3) años.

Este agravante no será aplicable cuando la circunstancia mencionada en ella ya se encuentre contemplada como elemento constitutivo o calificante del delito de que se trate.

ARTICULO 2º.- Modifícase el inciso 1) del artículo 80 de la Ley 11.179, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Inc. 1º A su ascendiente, descendiente, quien sea o haya sido su cónyuge o concubino, sabiendo que lo son;”

ARTICULO 3º.- Incorpórase como artículo 94 bis de la Ley 11.179, el siguiente texto:

“ARTICULO 94 bis.- Se impondrá prisión de un mes a seis meses a quien por cualquier medio causare a otro un menoscabo psíquico o una lesión no prevista en el artículo 89, o golpear sin causarle lesión, o maltratase, cuando la víctima sea o haya sido su cónyuge, aún sin convivencia, o concubino.

Si el delito se perpetrare contra una mujer o en presencia de menores, la pena mínima será de tres meses.”

ARTICULO 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo

Carlos S. Menem. –

FUNDAMENTOS:

Señor Presidente:

La violencia familiar es un flagelo que azota de modo indiscriminado a amplios sectores sociales, de las más diversas características. Se trata de conductas que rara vez y en situaciones extremas se hacen públicas pero afectan profundamente a sus víctimas, que en muchos casos llegan a sufrir lesiones psíquicas o físicas irreversibles y en muchos casos aún ocasionan la muerte.

Lamentablemente muchos de los delitos que se hacen públicos y son juzgados llevan como trasfondo situaciones de violencia familiar. Pero no podemos limitar el análisis de que solo pueden ser provocados por situaciones de violencia aquellos establecidos en el Libro Segundo, Título I del Código Penal, es decir los delitos contra las personas. Si bien son los más graves, la violencia familiar puede subyacer en cualquier de los tipo delictivos y es necesario atender esa situación como una circunstancia agravante.

Los agravantes son aquellas circunstancias accidentales al delito y concurrentes con la acción delictiva que producen el efecto de modificar la responsabilidad criminal del sujeto determinando un mayor quantum de pena por representar una mayor antijuridicidad de la acción y/o un plus de culpabilidad en el agente.

Entendemos que la sola circunstancia de ser cónyuge, ex cónyuge o concubino de la víctima constituye una circunstancia agravante para su autor, que debe ver elevada su pena en su condena.

Así, proponemos incorporar un nuevo artículo dentro del Libro Primero, Título V, Imputabilidad del Código Penal, que de modo expreso incremente la pena en un tercio de los mínimos y máximos del delito que se trate cuando alguno de los delitos previstos en este Código se cometiera contra quien sea o haya sido cónyuge o concubino. Asimismo se incorpora una definición general del concubinato a los efectos de ese Código que requiere un mínimo de 3 años de vida marital, no resultando aplicable el agravante para aquellos que habiendo sido cónyuge ya no lo sean.

Es claro que la circunstancia agravante incorporada no hace distinciones de género, ya que si bien es ampliamente mayor el porcentaje de víctimas femeninas, creemos necesario penar de modo más severo a cualquier de los miembros de la pareja que pueda cometer un delito contra la otra parte.

Pasando a la parte especial del Código Penal se promueve ampliar la figura del homicidio agravado por el vínculo a las relaciones de concubinato. La realidad social demuestra que por diversos factores existe una cantidad de parejas que no contraen

matrimonio y esa sola circunstancia no puede transformarse en un atenuante frente al delito más grave como el homicidio doloso conyugal.

Por último proponemos incorporar un nuevo tipo penal que contemple la situación más habitual resultante de la violencia familiar que es provocar un menoscabo psíquico o una lesión no prevista en el Código Penal, o golpear sin causarle lesión, o maltratarse a la víctima que sea o haya sido cónyuge aún cuando ya no convivieran o concubino.

De ese modo estamos sancionando con una pena razonablemente leve de entre uno y seis meses de prisión, a quien incurre en la conducta más extendida de violencia familiar, que en realidad lamentablemente es solo el prolegómeno de un desenlace mucho más grave.

Este delito no requiere para su tipificación la verificación de lesiones físicas, ya que por su propia naturaleza en general pasa desapercibido. Esto sigue la línea prevaleciente en otros ordenamientos jurídicos, por ejemplo el Código Penal del Distrito Federal de México modificado en el año 2002, que prevé dentro de los Delitos contra la integridad familiar, artículo 200 la violencia familiar penando a quien “Haga uso de medios físicos o psicoemocionales contra la integridad de un miembro de la familia, independientemente de que se produzcan lesiones”.

Más allá de la penalización de las conductas violentas, en este caso el derecho también se constituye en un instrumento de pedagogía social, para sensibilizar a la sociedad en contra de la violencia familiar. La falta de normas claras en contra de la violencia familiar en todos sus aspectos, implica la comunicación a la sociedad de un mensaje de permisividad estatal que no debe ser consentido.

De ahí que la proliferación de ordenamientos en contra de la violencia familiar, más allá de su propia eficacia, deben servir como detonadores de atención social sobre el fenómeno.

Por las razones expuestas solicito la aprobación del presente Proyecto de Ley.

Carlos S. Menem. -

(IX)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º.- Incorpórese al artículo 80 del Código Penal un nuevo inciso que llevará el número 11º y quedará redactado de la siguiente forma:

Art. 80.- (...)

“11º A una mujer que fuere, o según el caso alguna vez hubiere sido, su cónyuge, conviviente, ascendiente, descendiente, pariente colateral de segundo grado de consaguinidad o de afinidad, sabiendo que lo son. Como asimismo a una mujer por el hecho de ser tal o cuando mediare violencia por razones de género o en una relación desigual de poder. ”

Artículo 2º.- Modifíquese el artículo 2º de la ley 23.592, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Art. 2º.- Elévase en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal de todo delito reprimido por el Código Penal o Leyes complementarias cuando sea cometido por persecución, odio o desprecio a una raza, religión, nacionalidad o género; o con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial, religioso o de género. En ningún caso se podrá exceder del máximo legal de la especie de pena de que se trate.

Artículo 3º.- Modifíquese el artículo 132 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTICULO 132. – En los delitos previstos en los artículos 119: 1º, 2º, 3º párrafos, 120: 1º párrafo y 130 la víctima podrá instar el ejercicio de la acción penal pública con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales o privadas sin fines de lucro de protección o ayuda a las víctimas.”

Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ernesto R. Sanz. –

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Los últimos treinta años han sido fundamentales en el desarrollo de instrumentos a favor de la igualdad y la libertad de las mujeres. Con el antecedente de la modificación del título de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la década de 1970 se consolidó la prohibición de la discriminación contra las mujeres en el sistema universal de derechos humanos.

Uno de los instrumentos más relevantes es la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ratificada por las Naciones Unidas (1993), que define a la violencia contra la mujer como "todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada". Las Naciones Unidas reconocen tal acto como "un grave atentado contra los derechos humanos".

Argentina, a través de la reforma constitucional de 1994 ha elevado a jerarquía constitucional la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, pacto internacional fundamental en lo que hace a la violencia de género. El cumplimiento de los Estados Partes de las disposiciones de la Convención, es monitoreado por el Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y que fue creado a tales fines por aquella.

El Comité, a través de la Recomendación General Nº 19 ha señalado que "La violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre".

La aplicación de la Convención exige que los Estados Partes adopten medidas positivas para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer y, en este sentido, ha hecho hincapié en la obligación que tienen los Estados de adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas, estipulando que "los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de derechos o para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización".

Otro instrumento de importancia es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o más conocida como "Convención de Belem do Pará", adoptada por la Asamblea General de OEA en 1994, también fue ratificada por nuestro país el 5 de julio de 1996 por Ley 24.632 (Adla, LVI-B, 1722). La ratificación de este instrumento, implicó un importante avance en la implementación de normas y políticas públicas a desplegar en materia de violencia doméstica y sexual.

Tal circunstancia, se vio reflejada en el art. 7 inc. "c" de la "Convención de Belem do Pará": "Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente (...) c) incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso". (el destacado no es del original).

El término "femicidio" no ha sido incluido en el Diccionario de la Real Academia Española, no obstante, la magnitud del fenómeno es tal que ha acabado por imponerse en leyes, sentencias y técnicas de gobierno en distintos países.

En la actualidad y legalmente hablando, el único homicidio agravado que podría ser considerado un femicidio es el del inciso 1° del artículo 80 del Código Penal, es decir, el cometido por un descendiente, un ascendiente o un cónyuge de la persona asesinada. Sin embargo tal

previsión legal no incluye a las parejas no casadas legalmente ni tampoco a las ex parejas.

El término femicide, vinculado a la violencia sexista, es empleado por primera vez en Bruselas 1976 por Diana Russell en un acto ante el Tribunal Internacional de Crímenes Contra la Mujer. En esa ocasión esta autora no proporciona una definición explícita del término, lo que va haciendo en sucesivas publicaciones: "En 1990, Jane Caputi y yo definimos femicide como "el asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las mujeres" (Caputi y Russell 1990, 34), mientras que en 1992, Radford y yo lo definimos simplemente como "el asesinato misógino de mujeres por hombres" (Radford y Russell 1992, pp.xi, 3). (Russell y Harmes 2001, 14). En su sentido más amplio femicidio es toda muerte derivada de la subordinación femenina, que abarca tanto los homicidios como los suicidios originados en la violencia o las condiciones de discriminación, así como las acciones u omisiones que teniendo ese mismo origen terminan provocando la muerte de alguna mujer o niña.

Actualmente, las clases de femicidio son:

- 1) El femicidio íntimo: se presenta en aquellos casos en los que la víctima tenía (o había tenido) una relación de pareja con el homicida. No se limita a las relaciones en las que existía un vínculo matrimonial sino que se extiende a los convivientes, novios, enamorados y parejas sentimentales. También se incluyen los casos de muerte de mujeres ejecutados por un miembro de la familia, como el padre, el padrastro, el hermano o el primo.
- 2) El femicidio no íntimo: ocurre cuando el homicida no tenía una relación de pareja o familiar con la víctima. En esta categoría se incluye la muerte perpetrada por un cliente (tratándose de las trabajadoras sexuales), por amigos o vecinos, por desconocidos cuando se ataca sexualmente a la víctima antes de matarla así como la muerte de mujeres ocurrida en el contexto de la trata de personas.
- 3) El femicidio por conexión o vinculado: se da en aquellos casos en los que las mujeres fueron muertas en la "línea de fuego" de un hombre que pretendía matar o herir a otra mujer. Por lo general, se trata de mujeres parientes (por ejemplo hija, madre o hermana) que intentaron intervenir para evitar el homicidio o la agresión, o que simplemente se encontraban en el lugar de los hechos".

Ahora bien, las estadísticas actuales justifican acabadamente la necesidad de una regulación legal. Recientemente, un monitoreo elaborado por la ONG "La Casa del Encuentro" arrojó como resultado que en los primeros 6 meses del año 2010, 126 mujeres murieron a manos de un familiar o ex pareja, lo que resultó un aumento del 40 por ciento de los femicidios con respecto al mismo período del año anterior. Además, el documento alertó que sólo 18 de los 126 casos habían registrado denuncias o exposiciones previas por violencia y enfatizó que 7 femicidas pertenecerían a fuerzas de seguridad.

Los números difundidos por la ONG, a base de relevamientos de diarios y agencias de noticias nacionales, señalaron que la mayoría de los crímenes se registraron en los principales centros urbanos del país: la provincia de Buenos Aires encabezó la lista con 43 femicidios y fue seguida por Santa Fe (con 12) y Córdoba (con 11 asesinatos). Luego, se ubicaron las provincias de Entre Ríos (con 9 femicidios), Misiones (con 6) y la Ciudad de Buenos Aires, San Luis y Santiago del Estero (con 5). En Mendoza, Corrientes, Chaco, Catamarca, Salta, La Pampa, Tucumán, Río Negro, Chubut, Neuquén, La Rioja y Formosa tuvieron lugar entre 1 y 4 homicidios. El relevamiento también señaló que en 99 casos de 126 el sindicado como asesino integró el círculo afectivo de las víctimas: 43 de los presuntos asesinos eran ex esposos, parejas o novios; 38 eran esposos, parejas o novios; 9 eran vecinos o conocidos, 5 integran la categoría "otros familiares" y 4 eran padres o padrastros. En relación con las edades de las víctimas, 43 estaban entre los 19 y los 30 años, 41 entre los 31 y los 50 años, 15 entre los 51 y los 65 años y 9 mujeres entre los 13 y los 18 años. El documento, que da cuenta de los nombres de las 126 víctimas, señaló que en enero fueron asesinadas 24 mujeres; 20 en el mes de febrero, 26 en marzo; 16 en abril; 21 en mayo y 19 en junio. Entre las modalidades de los crímenes, el informe estableció que 30 mujeres fueron baleadas, 26 golpeadas y 24 apuñaladas.

El presente proyecto de ley introduce las figuras delictivas de femicidio y, en general, de crímenes misóginos, androfóbicos u originados en motivos de odio de género. Asimismo, se propone la derogación del avenimiento en los delitos contra la integridad sexual.

En el primero de los casos se incorpora un nuevo inciso al artículo 80 del Código Penal (perteneciente al Libro Segundo, "De los Delitos"; Título I, "Delitos contra las personas", Capítulo I, "Delitos contra la

vida”), que en su redacción vigente contempla las modalidades agravadas del tipo penal de homicidio: por el vínculo parental, por el modo, por pacto o acuerdo, por el fin, por un medio idóneo para crear un peligro común, por el concurso premeditado de dos o más personas, *criminis causa* y por la condición funcional del sujeto pasivo.

Agravantes a las que, tras la incorporación del inciso propuesto en el art. 1º del presente proyecto de ley, se les añadirá la del tipo penal del femicidio, cuya redacción contempla tanto la modalidad del femicidio íntimo como la del femicidio genérico y, aún también, la del femicidio por conexión u oblicuo.

Proyectar la incorporación de un nuevo inciso que contemple a estas figuras delictivas no ha sido una opción casual, sino que se ha elegido este camino pues somos conscientes que de haberse propuesto las modificaciones sobre el inciso primero del actual artículo 80 CP estaríamos dejando incólume la aplicabilidad a la violencia de género de las denominadas circunstancias extraordinarias de atenuación, que en estos casos han dado lugar a ciertas situaciones de injusticia en reiteración de viciadas prácticas patriarcales institucionalizadas tras cientos de años.

En tal sentido, no es novedad que las caracterizadas circunstancias extraordinarias de atenuación son una rémora jurídico penal de figuras delictivas que no tienen hoy cabida alguna en nuestra cultura como atenuantes. Así p.ej. la muerte ocasionada por sorpresa de ilegítimo concubito, o por sorpresa de flagrante delito de adulterio, o el padre o hermano que hiere o mata al que encuentra yaciendo con su hija o hermana menor de quince años.

Así ha sido injusto, aunque posible, que a determinados casos de homicidio por violencia de género, que hoy en día habrían de regirse por el inciso primero del art. 80 CP, se les haya aplicado las circunstancias atenuantes extraordinarias a modo de respuesta patriarcal, casi refleja, de un sistema que parece no admitir que se siga postergando su *aggiornamento*.

Otro tanto sucede, como ya se dijo, con el avenimiento en los casos de delitos contra la integridad sexual (art. 119, 1º, 2º y 3º párr., 120, 1º párr y 130 CP), cuya derogación también proponemos pues entendemos que no se ajusta a las pautas culturales actuales y que

reproduce, casi sin darse cuenta, los cánones más rancios del patriarcado.

Por otro lado, se ha previsto la modificación del artículo segundo de la denominada “Ley Antidiscriminación” que lleva el número 23.592, comunicando la agravante genérica ya contemplada a todo delito penal que fuere cometido por odio, persecución o desprecio hacia un determinado género.

Esta agravante, adecuada a la técnica legislativa de la norma, también alcanza a aquellos delitos que sean cometidos con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo de género.

Podría describirse a esta modificación de la ley contra la discriminación como una verdadera respuesta contra la violencia de género en general, inclusiva no sólo de las mujeres como víctimas, sino también de hombres y demás grupos o tipos de identidad de género, definidos de acuerdo a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente.

Creemos que la incorporación de estas figuras en la ley penal contribuirá con las respuestas que el Estado Argentino viene dando, invariablemente desde la recuperación de la democracia, para prevenir, sancionar y en definitiva erradicar cualquier forma de violencia y discriminación contra la mujer.

Por los motivos expuestos, señor Presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.

Ernesto R. Sanz.

(X)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

TIPIFICACIÓN DEL FEMICIDIO EN EL CÓDIGO PENAL

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 80 del Código Penal de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 80. - Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare:

1º A su ascendiente o descendiente, sabiendo que lo son.

2º A su cónyuge o ex cónyuge, conviviente o ex conviviente, o a una persona con la que mantenga o haya mantenido una relación de afectividad.

3º Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso.

4º Por precio o promesa remuneratoria.

5º Por placer, codicia, obsesión sexual, odio racial, religioso o de género.

6º Por un medio idóneo para crear un peligro común.

7º Con el concurso premeditado de dos o más personas.

8º Para preparar, facilitar, consumir u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito.

9º A un miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, por su función, cargo o condición.

10º Abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario.

11º A su superior militar frente a enemigo o tropa formada con armas. Cuando en el caso de los incisos primero y segundo de este artículo, mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho a veinticinco años.”

Artículo 2º.- Comuníquese.

Marina R. Riofrío.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

La magnitud de las violencias contra las mujeres interpela a los Estados a promover estrategias y políticas públicas destinadas a prevenir, sancionar y eliminar los tipos y modalidades bajo las cuales se manifiestan. En su compromiso de promover y proteger los derechos humanos deben incluir esta problemática en la agenda pública impulsando reformas institucionales y normativas que garanticen el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias.

El “femicidio” es una de las formas más extremas e irreparables de violencia contra las mujeres, es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad. Es un problema social, económico, político y cultural, que demanda respuestas estatales inmediatas.

El “femicidio” no es una problemática nueva; lo que es novedosa es la conceptualización y teorización del término, lo que ha sido de gran valor para su abordaje y visibilización. Es parte del acervo teórico de las corrientes feministas, quienes en un intento de construir prácticas sociales más equitativas entre varones y mujeres, recurren a nuevas nominaciones para dar cuenta de una realidad velada y silenciada.

La violencia de género ha sido el “dispositivo disciplinador” más eficaz del patriarcado, con el fin de garantizar la perpetuación del poder masculino, fomentando toda una serie de desventajas e inequidades, que han resultado en perjuicio de las mujeres. El concepto de “femicidio” ayuda a desarticular los argumentos que naturalizan la violencia de género como un asunto personal o privado y revela su carácter profundamente social y político, resultado de las relaciones estructurales de poder, dominación y privilegio entre los varones y las mujeres en la sociedad.

Tal como sostiene Ivonne Macassi León, “estos crímenes responden a un clima social de discriminación y violencia contra la mujer, que se sostiene en una sociedad que aún tolera el lenguaje violento hacia todo lo femenino y una cultura donde históricamente se desarrollan

prácticas sociales que atentan contra la libertad, la salud, la integridad y finalmente contra la vida de las mujeres”¹.

Los “femicidios” denuncian la naturalización de las formas más extremas de violencia contra las mujeres, presentándose como una alternativa a la neutralidad del término “homicidio”.

Distintas investigaciones sobre los “femicidios” dan cuenta de “un sustrato de violencia de género en la sociedad que mantiene un nivel relativamente constante de femicidios, que no depende de las situaciones coyunturales, las transformaciones sociales u otras razones que alimentan la violencia social”, sostiene Ana Carcedo².

Por ello, es fundamental discriminar los “femicidios” de los asesinatos de mujeres, aquellos en los que el género femenino de una víctima es irrelevante para el perpetrador. En cambio, sí deben ser considerados bajo esta categoría, aquellos homicidios de mujeres en los que la conducta del criminal evidencia un fundamento misógino o sexista, ocurra éste al interior de los hogares, en la vía pública, en situaciones de conflicto armado, o en cualquier otro ámbito público o privado donde las mujeres transcurren su vida cotidiana; es el poder de los varones ejercido sobre el cuerpo de las mujeres.

El concepto de “femicidio” proviene de la voz inglesa “femicide” y fue introducido por la escritora estadounidense Carol Orlock en 1974 y utilizado públicamente en 1976 por la feminista Diana Russell, ante el Tribunal Internacional de Los Crímenes contra las Mujeres, en Bruselas³.

Años más tarde, Diana Russell y Jill Radford (1992), en su obra “Femicide. The Politics of Woman Killing”, lo definirán como “el asesinato misógino de mujeres cometidos por hombres”, “se trata de crímenes de odio contra las mujeres”⁴. Ambas autoras sostienen que:

¹ **Macassi León, Ivonne** (Coord.) (2005): La violencia Contra la mujer: Femicidio en Perú. Lima, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Pág. 7.

² **Ana Carcedo**: Femicidio en Costa Rica 1990-1999. Costa Rica, Instituto Nacional de las Mujeres –INAMU.

³ **Atencio, Graciela**: “FEMINICIDIO-FEMICIDIO: Un Paradigma para el Análisis de la Violencia de Género”. En www.femicidio.net

⁴ **Marcela Largade**, al aportar la definición de Jill Radford y Diana Russell sobre femicidio. Conferencia en la Universidad de Oviedo, 12 de enero de 2006.

“... el feminicidio representa el extremo de un continuum de terror anti-femenino que incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos, tales como: violación, tortura, esclavitud sexual (particularmente por prostitución), abuso sexual infantil incestuoso o extra-familiar, golpizas físicas y emocionales, acoso sexual (por teléfono, en las calles, en la oficina, y en el aula), mutilación genital (clitoridectomías, escisión, infibulaciones), operaciones ginecológicas innecesarias (histerectomías), heterosexualidad forzada, esterilización forzada, maternidad forzada (por la criminalización de la contracepción y del aborto), psicocirugía, negación de comida para mujeres en algunas culturas, cirugía plástica y otras mutilaciones en nombre del embellecimiento”.

Un concepto esclarecedor para entender esta problemática, es lo que Liz Kelly⁵ denomina el “continuum de violencia contra las mujeres”. Desde esta perspectiva, las distintas formas de violencia hacia las mujeres como la violación, el incesto, el abuso físico y emocional, el acoso sexual, etcétera, “son todas expresiones diferentes de la opresión de las mujeres y no fenómenos inconexos. En el momento en que cualquiera de estas formas de violencia resulte en muerte de la mujer ésta se convierte en femicidio”. El femicidio, es por tanto, “la manifestación más extrema de este continuum de violencia”⁶.

El concepto de “femicidio” es también útil porque nos indica el carácter social y generalizado de la violencia basada en la inequidad de género y nos aleja de planteos individualizantes, naturalizados o patologizados que tienden a culpar a las víctimas, a representar a los agresores como “locos”, “fuera de control” o “animales”, o a concebir estas muertes como el resultado de “problemas pasionales”⁷, contribuyendo de esta manera al consenso y naturalización social de la violencia de género. Estos pensamientos tienen origen en mitos y estereotipos, que lejos de representar la realidad, la niegan, la ocultan o la justifican, reproduciendo estrategias de dominación que sustentan las relaciones de género en la sociedad patriarcal que hombres y mujeres compartimos. El acto femicida responde a la acción de un hombre violento que lleva al extremo el deseo y poder de dominación sobre el otro, traducido en la forma más extrema de violencia, el crimen.

⁵ Kelly, Liz (1988): *Surviving Sexual Violence*. England: Polity Press.

⁶ Carcedo, Ana. Op. Cit..

⁷ Carcedo, Ana. Op. Cit..

En América Latina, distintas expertas han abordado la problemática del “femicidio”. Tal es el caso de la antropóloga Marcela Largade, quien a partir del trabajo de Diana Russell y Jill Radford, analiza el término y lo traduce como “feminicidio”, para diferenciarlo de su homólogo en castellano homicidio, señalando que “homicidio sólo significa asesinato de mujeres. Nuestras autoras definen al femicidio como crimen de odio contra las mujeres, como el conjunto de formas de violencia que, en ocasiones, concluyen en asesinatos e incluso en suicidios”.

Asimismo, Largade define el “feminicidio” como “el conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas en un cuadro de colapso institucional”. Al redefinir el término, lo reviste de un plus de significados que dan cuenta de otro elemento no menos discutible: la impunidad. Dirá: “se trata de una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad. El feminicidio es un crimen de Estado”.

Para esta autora, “la ausencia de sanciones y de castigo a los asesinos, coloca al Estado como responsable por acción u omisión del feminicidio y éste tiene que asumir su complicidad o responsabilidad directa. Asocia el feminicidio a la cosificación del cuerpo de las mujeres que las vacía de sus derechos como “humanas”, vinculándolo a la feminización de la pobreza⁸.

Otra experta en el tema, Julia Monárrez, lo define como: “el asesinato de mujeres por razones asociadas con su género. El femicidio es la forma más extrema de violencia de género, entendida esta como la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres en su deseo de obtener poder, dominación o control”. Esta autora destaca que el elemento que caracteriza al “femicidio” es la tolerancia y minimización estatal de la problemática. La tolerancia e impunidad de los homicidas contiene un mensaje implícito de permisividad social⁹.

⁸ **Largade, Marcela (2005):** “El feminicidio, delito contra la humanidad”. En *Feminicidio, Justicia y Derecho*. México: Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada.

⁹ En **Morfín Otero, María Guadalupe**. VI Congreso Internacional de Estadísticas de Género “De Beijing a las Metas del Milenio”. INEGI, INMUJERES; UNIFEM Aguascalientes, Ags., 27-29 de septiembre de 2005. Ponencia “La Utilidad de los Sistemas de Información en el Estudio de los Feminicidios”.

Otro aspecto a tener presente es la caracterización de los “femicidios” como “crímenes de odio” u “odio de género”, como son los crímenes racistas y homofóbicos.

Según señalan distintas especialistas, el odio contra la mujer se explica como consecuencia de la infracción a dos normas del patriarcado: la norma del control o posesión sobre el cuerpo femenino y la norma de la superioridad masculina. Para Rita Segato, “la reacción de odio se desata cuando la mujer ejerce autonomía en el uso de su cuerpo desacatando reglas de fidelidad o de celibato –la célebre categoría de “crímenes contra la honra” masculina-, o cuando la mujer accede a posiciones de autoridad o poder económico o político tradicionalmente ocupadas por hombres, desafiando el delicado equilibrio asimétrico. En estos casos, los análisis indican que la respuesta puede ser la agresión y su resultado la muerte. La intencionalidad de matar o simplemente herir o hacer sufrir no define diferencias: en esta perspectiva, a veces el feminicidio es un resultado no deliberadamente buscado por el agresor”¹⁰.

En este sentido, los “femicidios” son, claramente, crímenes de poder, es decir, crímenes cuya finalidad radica en, simultáneamente, la retención o manutención, y la reproducción del poder.

De una u otra manera, todas las investigadoras han trabajado sobre una misma línea: “hacer visible lo invisible”, tratando de mostrar lo que está por debajo: el deseo de poder y dominación en su expresión más extrema: la violencia contra las mujeres.

Finalmente, debemos señalar que el “femicidio” ha sido categorizado de diferentes maneras. Independientemente de ello, tres son los tipos más difundidos, y que deben explicitarse en una reforma de la normativa penal:

El Femicidio íntimo, es decir, aquellos asesinatos cometidos por varones con quien la víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar, de convivencia, o afines a éstas.

El Femicidio no íntimo o público, es decir, aquellos asesinatos cometidos por varones con quienes la víctima no tenía relaciones

¹⁰ Segato, Rita (2006): Qué es un feminicidio. Notas para un debate emergente. Brasilia: Serie Antropología.

íntimas, familiares, de convivencia, o afines a éstas. Frecuentemente, el femicidio no íntimo involucra el ataque sexual de la víctima.

El Femicidio por “conexión o vinculado” registra dos categorías: 1) Personas que fueron asesinadas por el femicida, al intentar impedir el crimen o que quedaron atrapadas “en la línea de fuego” de un varón tratando de matar a una mujer, tal es el caso de mujeres parientes, niñas u otras mujeres que trataron de intervenir o que simplemente fueron asesinadas por el femicida; 2) Personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer, que fueron asesinadas por el femicida con el objeto de castigar y destruir psíquicamente a la mujer a quien consideran de su propiedad.

En América Latina, los “femicidios” se han convertido en tema central en la agenda política de los movimientos de mujeres y de los organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, promoviendo la formación de comisiones especiales a nivel legislativo y judicial para su investigación¹¹.

Muchas de estas acciones se articularon en torno a los crímenes de mujeres ocurridos a partir de 1993 en Ciudad Juárez de México. Estos crímenes fueron un detonante para acciones en toda América Latina, e incluso, para la incorporación del concepto de “femicidio” en el discurso social y político.

Como consecuencia de estos asesinatos, México fue el primer Estado condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una sentencia de abril de 2009¹². El significado de esta sentencia excedió el ámbito regional y sentó un precedente internacional. La CIDH concluyó que México violó los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal y el deber de no discriminación en el acceso a la justicia de 8 mujeres asesinadas en el año 2001 en un campo algodonero de Ciudad Juárez, así como las obligaciones contempladas en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

¹¹ **Chejter, Silvia** (2008): Femicidios. Desafíos teóricos y perfiles estadísticos. Buenos Aires, Centro de Encuentros Cultura y Mujer.

¹² **Corte Interamericana de Derechos Humanos**. Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Sentencia de 16 de Noviembre de 2009.

Determinó, asimismo, que el Estado incumplió con su deber de investigar por lo que deberá conducir eficazmente el proceso penal para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de la vida de las jóvenes.

En el ámbito del derecho comparado las experiencias en tipificar el “femicidio” en las legislaciones nacionales son variadas¹³.

Costa Rica fue el primer país en incorporar un tipo penal especial, denominado “femicidio”, en la Ley N° 8589 del año 2007 para la Penalización de la Violencia contra las Mujeres.

Se trata de una ley especial que penaliza y sanciona diversas formas de violencia contra las mujeres como práctica discriminatoria por razón de género específicamente en una relación de matrimonio, en una unión de hecho declarada o no. La pena que impone al femicidio es la misma que aplica al homicidio calificado (20 a 35 años).

En Guatemala, tras la promulgación de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en 1996, y debido a la presión de la comunidad por la cantidad creciente de asesinatos de mujeres, la legislación guatemalteca incorporó como femicidio en el Decreto 22 del 2008 a “quien en el marco de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, diera muerte a una mujer, por su condición de mujer, valiéndose de las siguientes circunstancias”: 1) Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja e intimidad con la víctima. 2) Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral. 3) Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima. 4) Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo. 5) En menosprecio del cuerpo de la víctima, para satisfacción de instintos sexuales o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación. 6) Por misoginia.

Chile, por su parte, modificó su Código Penal por Ley N° 20.480 (2010), para tipificar el delito de “femicidio” dentro de las disposiciones

¹³ CLADEM (2011): “Contribuciones al Debate sobre la Tipificación Penal del Femicidio/Feminicidio”. Perú.

relativas al delito de parricidio, cambiando la denominación del tipo penal cuando la víctima es una mujer. La pena es la prisión perpetua.

El Salvador, en noviembre de 2002 aprobó la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia. En su artículo 45 sanciona como femicida a “quien causare la muerte a una mujer mediando motivos de odio o menosprecio por su condición de mujer, considerando como circunstancias de odio o menosprecio las siguientes: 1) Que a la muerte le haya precedido algún incidente de violencia cometido por el autor contra la mujer, independientemente que el hecho haya sido denunciado o no por la víctima. 2) Que el autor se hubiese aprovechado de cualquier condición de riesgo o vulnerabilidad física o psíquica en que se encontraba la mujer víctima. 3) Que el autor se hubiera aprovechado de la superioridad que generaban las relaciones desiguales de poder basadas en el género. 4) Que previo a la muerte de la mujer, el autor hubiere cometido contra ella cualquier conducta calificada como delito contra la libertad sexual. 5) La muerte precedida de mutilación”.

En Argentina, en nuestra legislación penal, la muerte dolosa de una mujer por el simple hecho de ser mujer no constituye un tipo penal específico diferente al del homicidio.

Según difundió el Observatorio de Femicidios en Argentina de la Sociedad Civil “Adriana Marisel Zambrano”, de la Asociación Civil “La Casa del Encuentro”, al 31 de octubre de 2011 fueron asesinadas en el país por sus parejas, ex parejas o miembros de sus familias, 230 mujeres (88 fueron ejecutados por el marido, pareja o novio de la víctima; y 49 por su ex pareja). Esta cifra representa un incremento del 10% respecto del mismo período de 2010, cuando se registraron 208 casos, y un total de 260 femicidios en dicho año. Estas cifras son aún más significativas si tenemos en cuenta que en 2008, fueron asesinadas 207 mujeres, y en 2009, 231 mujeres. Las estadísticas no quedan en las víctimas, al menos 174 niños y niñas quedaron huérfanos en los primeros diez meses del año, luego de que su madre fuera asesinada por el hecho de ser mujer, historias que se repiten cambiando los nombres, las edades, los lugares.

Cuando hablamos de femicidio, más allá de la importancia que revisten todo los casos, hay algunos que son difíciles de no recordar, ya que involucran distintos grados de impunidad relacionados con el

poder, tal es el crimen de María Soledad Morales, en Catamarca; los asesinatos de mujeres en Mar del Plata; el Doble crimen de la Dársena hacia Leyla Bshier Nazar y Patricia Villalba, en Santiago del Estero; y la muerte de las turistas francesas, Cassandre Bouvier y Houria Moumni, en la provincia de Salta.

Es necesario considerar a la violencia sexista, como una cuestión política, social, cultural y de derechos humanos, de esta forma se podrá ver la grave situación que viven las mujeres en la Argentina como una realidad colectiva por la que se debe actuar de manera inmediata¹⁴.

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Ley 23.179, con rango constitucional desde el año 1994), y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Ley 24.632), demandaron a los países la necesidad de repensar la legislación y las políticas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

La Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en 2010 en nuestro país, vino a saldar este vacío legal y a sentar las bases para la reforma de la arquitectura institucional.

La misma implementa medidas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y a brindarles asistencia integral desde un abordaje integral y multidisciplinario. Tiene entre sus objetivos, promover y garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia; el desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres; la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres; y el acceso a la justicia.

Teniendo estas herramientas, el desafío que nos convoca es visibilizar la violencia contra las mujeres como un problema público, y situarla en el centro de la agenda del Estado como una violación de sus derechos humanos.

¹⁴ **Observatorio de Femicidios en Argentina de la Sociedad Civil “Adriana Marisel Zambrano”**, de la Asociación Civil “La Casa del Encuentro.

Nuestro Código Penal contiene la incriminación del femicidio íntimo en el agravante del homicidio del inciso primero del artículo 80. Pero este agravante se encuentra limitado a la muerte del cónyuge. En consecuencia quedan afuera de la figura agravada los casos de homicidio de los ex cónyuges y los casos de concubinato o los de parejas –de cualquier sexo- que no han convivido pero se encuentran unidas por una relación de afectividad.

En este sentido el legislador penal parece seguir el criterio de Vélez Sarsfield en el Código Civil que no contempla el caso del concubinato, con lo cual lo priva de efectos jurídicos. Pero esa omisión no es admisible en el ámbito del derecho penal y en la punición de conductas disvaliosas que tienen como rasgo saliente la violencia de pareja, se encuentre o no unida en matrimonio.

Es por estas razones que han existido desde hace tiempo numerosos proyectos legislativos de modificación del inciso primero del artículo 80 para incluir en el mismo el caso del concubinato, proyectos que no llegaron a tener sanción definitiva.

En la actualidad los medios dan cuenta cotidianamente de la existencia de numerosos casos de femicidios cometidos en el marco de las relaciones de pareja, lo cual impone una modificación urgente al inciso primero del Código Penal que permita incorporar tanto a los casos de concubinato como los casos de los ex cónyuges que no están contemplados.

La situación de riesgo y de violencia potencial no sólo encuentra fundamento en el vínculo presente sino también en el vínculo pasado, teniendo en cuenta que en las relaciones humanas no es tarea sencilla establecer cuando una relación ha terminado.

Por otra parte creemos también que es necesario alcanzar con la figura penal agravada al que matare a una persona con la que el homicida “mantenga o haya mantenido una relación de afectividad”. Incorporamos aquí a las relaciones que no han llegado a una situación de convivencia pero que claramente son el marco de la violencia que llevó al homicidio.

Creemos también –por todas las razones expuestas- que es necesario contemplar en la figura agravada los casos de homicidios motivados

por una obsesión sexual (aunque no exista vínculo de ningún tipo) y los que responden a violencia de género, supuestos ambos que son repudiables y lamentablemente se han incrementado en los últimos tiempos.

Si bien es cierto que existen voces que manifiestan su disconformidad frente a la posibilidad de incorporar la figura del femicidio al Código Penal argentino, y que esta medida debe ir acompañada de políticas públicas de prevención y sensibilización ciudadana, la medida es reconocida como de acción positiva por cuanto promueve la visibilización social y política de esta forma extrema de violencia contra las mujeres, a la vez que la penalización contribuirá a la ruptura de la impunidad que envuelve a estos crímenes de odio de género.

La reforma del Código Penal que se propone, aparte de conformar una medida de justicia, sería una medida positiva de visibilización de la violencia de género, además de convertirse en clara señal de desarrollo social y humano, acorde a las sociedades democráticas.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen en el tratamiento y sanción de esta iniciativa.

Marina R. Riofrío.

(XI)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º.- Modifíquese el artículo 78 del Código Penal, Título XIII, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 78: El término violencia contra las mujeres comprende a “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.

También queda comprendido en el concepto de violencia, el uso de medios hipnóticos o narcóticos.

Artículo 2º.- Modifíquese el artículo 80 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 80: Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare:

1º. A su ascendiente o descendiente consanguíneo o adoptivo; o cónyuge o ex cónyuge, concubino o ex concubino, padre o madre de un hijo en común; o a la persona con quien mantenga o haya mantenido una relación de pareja sabiendo que lo son;

2º. Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso;

3º. Por precio o promesa remuneratoria;

4º. Por placer, codicia, odio racial o religioso;

5º. Por violencia contra la mujer.

6º. Por un medio idóneo para crear un peligro común;

7º. Con el concurso premeditado de dos o más personas;

8º. Para preparar, facilitar, consumir u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para si o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito.

9º. A un miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, por su función, cargo o condición.

10º. Abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario.

11º. A su superior militar frente a enemigo o tropa formada con armas. Cuando en el caso del inciso 1 de este artículo, mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho a veinticinco años.

Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Graciela di Perna.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El femicidio es una expresión del ejercicio de poder y dominación que un hombre ejerce sobre una mujer. En muchas ocasiones, este tipo de delito resulta ser el desenlace de reiteradas agresiones durante el

transcurso del tiempo por parte de parejas o ex parejas que amparadas en el amor a sus mujeres llegan a cometer homicidio. En otras oportunidades, es resultado del ataque sexual de un conocido o un desconocido a una mujer, ocasionándole la muerte posteriormente.

Estos delitos de género se sustentan en un tramado cultural que se ha reproducido históricamente, representado por la discriminación y victimización hacia las mujeres.

En tal sentido, la Organización de Naciones Unidas define a la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada”.

La República Argentina ha ratificado la mayoría de los tratados internacionales de Derechos Humanos, específicamente aquellos referidos a la defensa de los derechos de las mujeres. Durante los últimos años, nuestro país ha avanzado en materia legislativa, contemplando los parámetros de la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, incorporada a nuestra Constitución Nacional en 1994.

En esa misma tesitura, el Congreso Nacional sancionó en el año 2009 la Ley 26.485 sobre Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en los ámbitos en que estas desarrollen sus relaciones interpersonales. El artículo 4º de este texto legal entiende como violencia contra las mujeres “a toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”.

La precitada ley establece a su vez la definición de violencia indirecta, entendiendo como tal a “toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón”.

No obstante, debemos destacar que nuestro ordenamiento legal aún no ha dado una respuesta integral al problema de la violencia de género. Solo existen leyes parciales que atienden distintas manifestaciones de la violencia contra la mujer, en distintos niveles de nuestra legislación.

A raíz de la expresión femicidio y la utilización pública de la expresión violencia contra las mujeres, se ha hecho visible la necesidad imperiosa de legislar esta problemática. De esta manera, el Estado Argentino considera la violencia contra las mujeres en un sentido integral como parte de una política de ampliación e inclusión de derechos, pero se debe continuar en este camino, adecuando nuestra legislación a los estándares internacionales.

Por tal motivo, considero absolutamente necesaria la incorporación al artículo 78 de nuestro Código Penal del término violencia contra las mujeres, permitiendo de esta manera una tipificación más completa, abarcativa y específica de este delito, ya que reafirma que el ejercicio de cualquier tipo de violencia contra una mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, es una violación de sus derechos en forma absoluta.

Al respecto, la Organización de Naciones Unidas establece que si bien las violaciones de derechos humanos afectan tanto a hombres como a mujeres, su impacto y su carácter cambian y asumen características diferenciales según el sexo de la víctima. La mayoría de las lesiones de los derechos de las mujeres y de las situaciones de discriminación y abuso de las que son objeto, se deben en forma específica a su condición de mujer. Los expertos de Naciones Unidas en la temática concluyen que “toda persona puede ser víctima de actos de violencia, pero el sexo se convierte en uno de los factores que aumenta de modo significativo su vulnerabilidad”.

A modo estadístico, durante los primeros diez meses del año 2011, se contabilizaron doscientos treinta (230) femicidios en todo el país, un diez por ciento (10%) más que en el mismo período del año anterior. (en los primeros diez meses de 2010, se detectaron doscientos ocho - 208- casos de femicidios). Esta cifra, fue obtenida como resultado de un relevamiento realizado por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” coordinado por la Asociación Civil la Casa del Encuentro, y se basa en las informaciones diarias

publicadas en 120 medios periodísticos del país, ya que en la actualidad no se cuenta con estadísticas oficiales.

En la mayoría de los casos se señala como presunto agresor al marido o novio y, en segundo lugar, a una ex pareja. Un dato no menor, es que como consecuencia de este delito, ciento setenta y cuatro (174) niños quedaron huérfanos.

Por lo expuesto ut supra, las características de este tipo de violencia manifiesta resultan propicias para modificar el inciso 1º del artículo 80 de nuestro Código Penal, a los fines de aplicar sus disposiciones a la figura del homicidio agravado por el vínculo, siendo esta modificación mucho más específica que la vigente. Actualmente, el inciso 1º tan sólo menciona como agravante al que matare a su ascendiente, descendiente o cónyuge, quedando fuera de esta tipificación aquellos vínculos sean o no consanguíneos; cuando se trata de ex cónyuge, padre o madre de un hijo en común, y otros vínculos afectivos como ser personas con las que se haya mantenido una relación de pareja.

Como ya he mencionado en el presente proyecto, la diferencia entre este tipo de violencia y otras formas de agresión y coerción previstas en nuestro Código Penal estriba en que, en este caso, el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer. Por lo tanto, también es necesaria la incorporación del inciso 5º al artículo 80, ya que quedarían incluidos todos los delitos por violencia contra la mujer que no se encuentren encuadrados ni comprendidos en los previstos en el inciso 1º del mismo artículo.

Por lo tanto, el concepto de violencia contra la mujer pone en evidencia que las relaciones de poder entre hombres y mujeres que se dan en nuestras sociedades, son asimétricas y, en consecuencia, perpetúan la subordinación y desvalorización de las mujeres. Asumir este concepto es un cambio relevante en la conceptualización de la violencia contra la mujer, lo que implica analizar y modificar estrategias de intervención por parte del Estado en su prevención y erradicación.

El respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos constituyen una exigencia de las sociedades actuales, y los derechos de la mujer no pueden verse limitados ni trasgredidos bajo ningún pretexto, ni por personas a título individual, ni por instituciones, ni por los Estados ni por las ideologías, incluyendo las religiosas. Nada

puede estar por encima del respeto de los derechos humanos fundamentales y las libertades democráticas de las mujeres, en tanto sujetas humanas.

Señor Presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Graciela A. di Perna. -

(XII)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

ARTÍCULO 1° — Sustituyese el artículo 80 del Código Penal (Ley 11.179 T.O. Decreto 3992/84 y sus modificatorias) a tenor del siguiente texto:

“ARTÍCULO 80 — Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare:

1. A su ascendiente o descendiente, sabiendo que lo son;
2. A su cónyuge o conviviente;
3. A una mujer por su condición de género;
4. A una persona con vínculo de parentesco por consanguinidad o afinidad con una mujer, cuando mediare violencia de género;
5. Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso;
6. Por precio o promesa remuneratoria;
7. Por placer, codicia, odio racial o religioso o hacia la orientación sexual;
8. Por un medio idóneo para crear un peligro común;
9. Con el concurso premeditado de dos o más personas;
10. Para preparar, facilitar, consumir u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito;
11. A un miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, por su función, cargo o condición;

12. Abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario;

13. A su superior militar frente a enemigo o tropa formada con armas.

Cuando en el caso de los incisos primero y segundo de este artículo, mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho a veinticinco años.”

ART. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Daniel F. Filmus. —

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La República Argentina ha incorporado al Art. 75 inciso 22, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer aprobada por Resolución 34/80 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, ratificada por Ley 23.179 de fecha 8 de mayo de 1985.

También ha suscripto la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer – “Convención De Belem Do Para”, suscripta en Belem Do Para, República Federativa del Brasil el 9 de junio de 1994, ratificada por Ley 24.632 de fecha 13 de marzo de 1996.

Parte de las disposiciones contenidas en estas normas internacionales, fueron internalizadas en la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, sancionada el 11 de marzo de 2009, y cuyas disposiciones son de orden público.

Con precisión, en el artículo 1 de la “Convención De Belem Do Para” se define la violencia contra la mujer “...como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.”

Por otra parte en el capítulo III de dicha Convención Internacional se establecen los deberes de los estados signatarios, entre ellos el consagrado en el artículo 7, apartado c., que dispone: “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas, orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: [...] c. incluir en su legislación interna normas penales [...] que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer [...]”

Una de las formas más extremas de violencia contra la mujer es el femicidio/feminicidio, término esgrimido por primera vez por Diana Russell¹⁵, destacada feminista, ante el Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres que sesionó en Bruselas en el año 1976 y que definió como “el asesinato de mujeres a manos de hombres, debido a que son mujeres”.

Dicho concepto evolucionó a una definición más abarcativa que caracteriza al femicidio como la “muerte de mujeres asociadas a su condición de género”, conforme sostiene con mayor precisión la jurista boliviana Julieta Montaña –integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-, se trata del asesinato de mujeres (homicidio calificado en algunas legislaciones), que tiene “como patrón común el intento de los agresores de dominar, poseer y controlar a las mujeres”. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia del 16 de noviembre de 2009, definió al femicidio como “el homicidio de mujer por razones de género”, en un fallo dictado como consecuencia de la acción iniciada por la abogada de los familiares de ocho mujeres brutalmente violadas y asesinadas en Ciudad Juárez, México, en un lugar conocido como “campo algodoner”. Estos asesinatos se produjeron durante 2001, pero la aparición de cadáveres femeninos en esta ciudad había comenzado en 1992.

El concepto ha tenido recepción legislativa, conforme surge del informe del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), “Contribuciones al Debate sobre la Tipificación penal del Femicidio/Feminicidio”, cuatro países latinoamericanos han tipificado el femicidio como el asesinato de

¹⁵ RUSSELL, Diana E H. and Radford, Jill, 1992, *Femicide, the politics of woman killing*, Buckingham, Open University Press.

mujeres: El Salvador¹⁶ (2002), Costa Rica¹⁷ (2007), Guatemala¹⁸ (2008) y Chile¹⁹ (2010).

Existen estudios puntuales de caso sobre el alcance del delito, pero no se ha implementado en nuestro país un protocolo de registro que permita agregar los datos estadísticos sobre delitos con que cuentan las poderes judiciales de las diferentes jurisdicciones bajo la calificación de femicidio.

Sin embargo es posible aproximarse a la magnitud del problema, a partir del seguimiento de los casos que cobran estado público y se difunden en los medios masivos de comunicación social. En este sentido, el Observatorio de Femicidios en la Argentina de La Casa del Encuentro²⁰, ONG creada en el año 2003 que cuenta con un área de investigación específica en la materia, concluye siguiendo este método de relevamiento que en nuestro país en el año 2009 hubo 231 femicidios registrados, que se incrementan en el año 2010 a 260 y que para el año 2011 ascendió a 282 asesinatos.

Esto muestra que en 2011, en nuestro país fue asesinada una mujer cada 31 horas por el solo hecho de ser mujer, representando un 8%

¹⁶ El Salvador cuenta con una Ley Especial integral para una vida libre de violencia en Noviembre del 2002, que en su artículo 45 sanciona como femicida a “quien causare la muerte a una mujer mediando motivos de odio o menosprecio por su condición de mujer, considerando como circunstancias de odio o menosprecio las siguientes: a) Que a la muerte le haya precedido algún incidente de violencia cometido por el autor contra la mujer, independientemente que el hecho haya sido denunciado o no por la víctima. b) Que el autor se hubiese aprovechado de cualquier condición de riesgo o vulnerabilidad física o psíquica en que se encontraba la mujer víctima. c) Que el autor se hubiera aprovechado de la superioridad que generaban las relaciones desiguales de poder basadas en el género. D) Que previo a la muerte de la mujer, el autor hubiere cometido contra ella cualquier conducta calificada como delito contra la libertad sexual. e) La muerte precedida de mutilación”.

¹⁷ Costa Rica contempla el femicidio en la Ley N° 8.589 del año 2007 tipificándolo como “quien dé muerte a una mujer con la que mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho, declarada o no”, por lo que recoge solamente el femicidio íntimo.

¹⁸ Guatemala incorporó como femicidio en el Decreto 22 del 2008 a “quien en el marco de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, diera muerte a una mujer, por su condición de mujer, valiéndose de las siguientes circunstancias”: a) Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja e intimidad con la víctima. b) Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral. c) Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima. d) Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo. e) En menosprecio del cuerpo de la víctima, para satisfacción de instintos sexuales o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación. f) Por misoginia.

¹⁹ Chile modificó su Código Penal por Ley N° 20.480 del 2010, introduciendo el concepto de la siguiente forma: “El que mate a una persona con la que tiene o ha mantenido una relación de convivencia o vínculo matrimonial, o tiene un hijo en común, el delito tendrá el nombre de femicidio”.

²⁰ Ver <http://www.lacasadelencontro.org/>

más que en 2010. En el 60% de los casos –para 2011- los crímenes fueron cometidos por cónyuges, novios o ex parejas de las víctimas. El 50% de los casos fueron de violencia intrafamiliar, y sólo el 27% en ocasión de robo o casos de inseguridad, lo que demuestra que para las mujeres es más peligrosa su propia casa, que la calle.

Otro estudio desarrollado por el Centro de Encuentro Cultura y Mujer (CECyM, conducido por Silvia Chejter, Gabriela Barcaglione y otros) sobre el asesinato de mujeres en la provincia de Buenos Aires (1997-2003) concluye que “...del total de homicidios de mujeres (1.284) el 83% (1.072) son femicidios. Tomando el total de homicidios de mujeres, se constata que una mujer es asesinada cada dos días en la provincia de Buenos Aires. Tomando los que claramente están identificados como femicidios, se comete un femicidio cada dos días y medio.”

El mismo estudio da cuenta que el 60% de los femicidios se concentra en el intervalo de 18 a 55 años, aunque el porcentaje más alto, en edades jóvenes. El 35,07% de los femicidios corresponde a mujeres de entre 18 a 35 años, lo que muestra que las mujeres son asesinadas dentro del rango de edad de mayor productividad para sus vidas en términos sociales, educativos y laborales y de mayor de posibilidades reproductivas.

Este dato respalda la cuestión del impacto económico que el asesinato de mujeres tiene para la sociedad. Así como también la relación que guarda con la defensa de los derechos humanos. Las mujeres son asesinadas mayoritariamente en el momento de mayor plenitud vital y de producción económica y social.

Surge del mismo estudio, analizando la relación víctima-victimario – que el porcentaje más alto, el 68% son homicidios cometidos por la pareja, ex pareja, concubino, novio o amante. Es decir, femicidios íntimos. Los otros casos incluyen los homicidios de otros familiares, entre los cuales se destacan de manera significativa los homicidios cometidos por los hijos (casi un 11%).

Sólo en 540 casos, que componen la muestra, existe registro del vínculo entre víctima y victimario, sobre dicha base el CECyM, elaboró el siguiente cuadro comparativo: “MUJERES VÍCTIMAS DE

HOMICIDIOS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SEGÚN PARENTESCO DE LOS CONOCIDOS Años 1997- 2003”

| RELACIÓN | CASOS | % |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| CONCUBINO/ ESPOSO / EX PAREJA/PAREJA/ NOVIO/ AMANTE | 369 | 68,33 |
| FAMILIAR (HIJO/HIJA/ HERMANA/HERMANO/NIETO/ABUELO/MADRASTRA) | 67 | 12,41 |
| PADRE/ MADRE/ PADRASTRO | 57 | 10,56 |
| OTRO NO FAMILIAR CONOCIDO | 47 | 8,70 |
| TOTAL | 540 | 100,00 % |

También merece ser considerado con toda atención el denominado “femicidio vinculado”. Nuevamente, la ONG La Casa del Encuentro aporta una definición “partiendo del análisis de las acciones del femicida, para consumir su fin: matar, castigar o destruir psíquicamente a la mujer sobre la cual ejerce la dominación”; y los agrupa en dos tipos: a) “Personas que fueron asesinadas por el femicida, al intentar impedir el Femicidio o que quedaron atrapadas ‘en la línea de fuego’”; y “b) Personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer, que fueron asesinadas por el femicida con el objeto de castigar y destruir psíquicamente a la mujer a quien consideran de su propiedad.”

Como ejemplo del femicidio vinculado cabe mencionar los casos de niños o niñas víctimas del delito por el mismo agresor que ha atacado su madre, motivados por el odio que siente hacia ella. Inclusive existen hechos en que se mata sólo a los niños con el fin de castigar o destruir psíquicamente a la mujer a la que están vinculados, sobre la cual se pretende ejercer dominación. Huelgan palabras para describir el carácter aberrante de estos crímenes que constituyen además una violación a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, especialmente resguardados por la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Ley 26.061.

Otro punto a considerar en la temática del femicidio lo constituyen los huérfanos y huérfanas que produce. En el año 2011 fueron 346 niños y niñas que quedaron sin madre. Al respecto propondremos oportunamente por vía civil, la automática cesación de la patria potestad para el homicida de la madre.

Los datos precedentes tienen por objeto coadyuvar a la visibilización de un caso extremo de violación del derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad y al ejercicio pleno de todas sus facultades psíquicas, físicas y sociales; es decir, una violación a los derechos humanos de las mujeres.

El derecho penal opera con retraso, una vez que los femicidios ya han ocurrido y son un problema social creciente en nuestro país. No obstante ello, entendemos que proyectos de este tenor ponen en evidencia la realidad cotidiana del asesinato de mujeres, las cuales son privadas de la vida, en un ejercicio de control y de poder, lo que no ocurre con los homicidios de varones

Otro argumento a favor de la penalización y explicitación del femicidio, es que ayuda a cambiar la mentalidad patriarcal de algunos jueces y juezas., obligándolos a desterrar la utilización de la llamada “emoción violenta” para aplicar atenuantes que disimulen la situación de violencia extrema utilizada contra las mujeres.

Visibilizar el femicidio tiene, por lo tanto, un valor simbólico y promocional de conductas en el ámbito jurídico. Y compromete al Estado en la formulación de políticas públicas con orientación de protección de género.

“No nombrar el femicidio, no tipificarlo, significa allanarse a un discurso pasivo, reproduciendo y perpetrando las relaciones de poder que existen. Es necesario un discurso radical, un lenguaje que rompa con el androcentrismo, en vez de seguir reproduciendo el discurso de las instituciones sociales dominantes”. Haydée Méndez Illueca, abogada panameña, integrante del CLADEM.

El impulso de odio con relación a la mujer se explica como consecuencia de la infracción femenina a las dos leyes del patriarcado: la norma del control o posesión sobre el cuerpo femenino y la norma de la superioridad masculina. La reacción de odio se produce cuando la mujer ejerce autonomía en el uso de su cuerpo desacatando reglas de fidelidad o de celibato, o cuando la mujer accede a posiciones de autoridad o poder económico o político tradicionalmente ocupadas por hombres, desafiando el delicado equilibrio asimétrico. En este sentido, los crímenes del patriarcado son

crímenes de poder, es decir, crímenes cuya doble función es la retención o manutención, y la reproducción del poder.

Así como el femicidio, los crímenes racistas, de religión o por orientación sexual también son crímenes de odio, que merecen reproche penal. Los avances logrados por nuestro país, que se reflejan entre otras, en la Ley 23.592 de actos discriminatorios han sido significativos, y en el marco de los nuevos derechos y garantías de tercera generación consagrados en la reforma de la Constitución Nacional, se considera necesario tratarlos de idéntico modo, equiparando el quantum de la pena.

A los efectos de que las consideraciones de hecho y de derecho detalladas se plasmen en la normativa penal de forma efectiva, proponemos en el presente proyecto la reforma del Art. 80 del Código Penal, incorporando entre las agravantes al femicidio, al femicidio vinculado y al homicidio por orientación sexual.

Se incorpora un inciso, agravando el homicidio al que matare “A una mujer por su condición de género”, caso de femicidio. O al que matare “A una persona con vínculo de parentesco por consanguinidad o afinidad con una mujer, cuando mediere violencia de género” que recepta el supuesto de femicidio vinculado. Y finalmente, se incorpora al actual inciso 4. La agravante por “odio... hacia la orientación sexual” de la víctima.

Por último se desglosa el actual inciso 1., separando la agravante relacionada con los ascendientes y descendientes, del caso del cónyuge, al que se incorpora la figura del conviviente, reconociendo así una realidad social innegable, que justifica una equiparación en la aplicación del tipo penal.

Por todas las consideraciones expuestas, y en el convencimiento de que las mismas son compartidas por esta Honorable Cámara, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.

Daniel F. Filmus. –

(XIII)



Proyecto de ley

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, etc.

ARTÍCULO 1º: Modifíquese el inciso 1º del artículo 80 del Código Penal que quedará redactado conforme al siguiente texto:

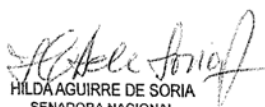
Al que matare:

Inciso 1º: a su ascendiente, descendiente o cónyuge, sabiendo que lo son o a su conviviente.

En estos casos el Tribunal ordenará al condenado la obligación de someterse a tratamiento psicológico/ psiquiátrico, conforme la gravedad del hecho y la peligrosidad revelada por el autor, de acuerdo a las pautas establecidas por los artículos 40 y 41 del Código Penal.

Dicha terapéutica deberá propender a evidenciar las consecuencias sociales negativas generadas por la violencia de género y proceder a impartir la enseñanza de los derechos humanos universales, en las condiciones que se determinen.

ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.


HILDA AGUIRRE DE SORIA
SENADORA NACIONAL
LA RIOJA

Proyecto de ley

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, etc.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El siguiente Proyecto pretende incorporar el femicidio como tipo agravado de homicidio debido a que en el primero se afecta directamente la vulnerabilidad de la víctima tratándose específicamente de una cuestión de género, por lo que se sitúa en un lugar totalmente diferente del delito de homicidio mencionado anteriormente.

El término femicidio/feminicidio fue esgrimido por primera vez por Diana Russell ¹, destacada feminista, ante el Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres que sesionó en Bruselas en el año 1976 y que lo definió como *"el asesinato de mujeres a manos de hombres, debido a que son mujeres"*. Ello evolucionó a una definición más abarcativa que caracteriza al femicidio como *"la muerte de mujeres asociada a su condición de género"*.

La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia del 16 de noviembre 2009, definió al femicidio como el *"homicidio de mujer por razones de género"*, en un fallo dictado como consecuencia de la acción iniciada por la abogada de los familiares de ocho mujeres brutalmente violadas y asesinadas en Ciudad Juárez, México, en un lugar conocido como "campo algodnero".

¹ Russell, Diana E H, and Radford, Jill, 1992, *Femicide, the politics of woman killing*, Buckingham, Open University Press

Proyecto de ley

3

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, etc.

Estos homicidios se produjeron durante 2001, pero la aparición de cadáveres femeninos en esta ciudad había comenzado en 1992.

Nuestra legislación incorpora diversas disposiciones, Convenciones y otras normas que regulan y protegen la violencia de género, en efecto:

La República Argentina ha incorporado el Art. 75 inciso 22, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de la Discriminación contra la Mujer aprobada por la Resolución 34/80 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, ratificada por la Ley 23.179 de fecha 8 de mayo de 1985.

También ha suscripto la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer- "Convención de Belem Do Para", suscripta en Belem Do Para, República Federativa del Brasil el 9 de junio de 1994, ratificada por la Ley 24.632 de fecha 13 de marzo de 1996.

Parte de las disposiciones contenidas en estas normas internacionales, fueron internalizadas en la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, sancionada el 11 de marzo de 2009, y cuyas disposiciones son de orden público ².

No podemos dejar de lado la realidad actual, la que manifiesta de forma evidente que el tema en cuestión fue noticia permanente durante el año 2011 con un saldo escalofriante de 282 muertes en Argentina de femicidios y femicidios vinculados a mujeres y niñas, según estadísticas elaboradas por el Observatorio Adriana Marisel Zambrano.

² Cfr Proyecto de Ley de Daniel Filmus, (S-0535/12)

Proyecto de ley

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, etc.

De aquellos casos que se pudieron registrar con mayor exactitud, 164 fueron perpetrados por esposos, parejas, novios, ex parejas; 80 fueron cometidos en la casa de la víctima y 79 en una vivienda en común.

Con el 32.6% del total, la provincia de Buenos Aires es el distrito con mayor cantidad de femicidios de todo el país y La Plata es el partido que encabeza el ranking bonaerense.

El agravamiento del homicidio por el matrimonio se funda en el menosprecio del respeto que se deben mutuamente los esposos.

Para la configuración del agravante es necesario tanto el elemento objetivo (existencia del vínculo) como el subjetivo (conocimiento de dicho vínculo).

Así también lo ha ratificado la jurisprudencia, que ha señalado en idéntico sentido que “cuando el artículo 80 dispone que se aplicará reclusión perpetua o prisión perpetua al que matare a su esposa, presume que el esposo, además de violar la ley con la destrucción de una vida humana, atenta contra las propias leyes de la naturaleza con la carencia de evidentes sentimientos primarios. (T.S Santa Fe, LL, 48-613, disidencia).

En lo que aquí interesa, la calificación solo alcanza a quien ha contraído matrimonio válido para las leyes argentinas puede considerarse casado.

De allí, que las hipótesis de la muerte de la concubina, ha sido considerada dentro del tipo de homicidio simple, porque en este caso es claro que no puede hablarse de cónyuges.

El presente proyecto incluye en el agravante al homicidio del conviviente. En consonancia con lo que venimos propiciando, hablamos de conviviente para

Proyecto de ley

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, etc.

referir a la unión de hecho como unión sexual del hombre y la mujer que se encuentren en estado de aparente matrimonio.

Es claro que el mismo fundamento que ha servido para sostener la calificación en el caso de los cónyuges, es aplicable a quien ha formado una unión estable sin vínculo jurídico. Porque lo que determina el reproche es el hecho del menosprecio que exhibe quien mata a su pareja respecto del deber de respeto que le debe, al margen del reconocimiento efectuado por la autoridad pública y dos testigos de ese vínculo. Es así que lo que repugna y por ende, merece la pena más severa, es que atente contra la vida de uno de los miembros de una relación vincular, que no por no tener reconocimiento legal, deja de ser tal. Puesto que el afecto y la intimidad son los que determinan el compromiso de la vida en común que importa derechos y deberes de entre los que se desprende el de respeto.

Es bueno repasar los últimos guarismos de los que disponemos. Así, según el censo del 2001, en la Argentina sobre un total de 26.681.048 habitantes de más de 14 años, había un total de 13.031.050 personas integradas en un "núcleo conyugal"; de éstas, 9.830.361 estaban unidas en matrimonio tradicional (39.8%), pero 3.200.689 estaban unidas de hecho (15%).³

Argentina, a través de la reforma constitucional de 1994 ha elevado a jerarquía constitucional la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y que fue creado a tales fines por aquella.

A

³ Cfr Proyecto de ley de Sonia Escudero (S-0205/11)

Proyecto de ley

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, etc.

El Comité, a través de la Recomendación General N° 19 ha señalado que “La violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades y pie de igualdad con el hombre”

La aplicación de la Convención exige que los Estados Partes adopten medidas positivas para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer y, en este sentido, ha hecho hincapié en la obligación que tienen los Estados de adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas, estipulando que “ los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia de vida para impedir la violación de derechos o para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización”

En la actualidad y legalmente hablando, el único homicidio agravado que podría ser considerado femicidio es el del inciso 1° del artículo 80 del Código Penal, es decir, el cometido por un descendiente, un ascendiente o un cónyuge de la persona asesinada. Sin embargo tal previsión legal no incluye a las parejas no casadas legalmente ni tampoco a las ex parejas.

La Organización no Gubernamental “La Casa del Encuentro” realizó un monitoreo que arrojó como resultado que en los primeros 6 meses del año 2010, 126 mujeres murieron a manos de un familiar o ex pareja, lo que resultó un aumento del 40% de los femicidios con respecto al mismo período del año anterior. Además, el documento alertó que solo 18 de los 126 casos habían registrado denuncias o exposiciones previas por violencia y enfatizó que 7 feministas pertenecían a una fuerza de seguridad.

Proyecto de ley

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, etc.

Los números difundidos por la ONG, a base de relevamientos de diarios y agencias de noticias nacionales señalaron que la mayoría de los crímenes se registraron en los principales centros urbanos del país: la provincia de Buenos Aires encabezó la lista con 46 femicidios y fue seguida por Santa Fe (con 12) y Córdoba (con 11 asesinatos). Luego, se ubicaron las provincias de Entre Ríos (con 9 femicidios), Misiones (con 6) y la ciudad de Buenos Aires, San Luis y Santiago del Estero (con 5). En Mendoza, Corrientes, Chaco, Catamarca, Salta, La Pampa, Tucumán, Río Negro, Chubut, Neuquén, La Rioja y Formosa, tuvieron lugar entre 1 y 4 homicidios. El relevamiento también señaló que en 99 casos de 126 el sindicado como asesino integró el círculo afectivo de las víctimas. 43 de los presuntos asesinos eran ex esposos, parejas o novios; 38 eran esposos, parejas o novios; 9 eran vecinos o conocidos, 5 integran la categoría "otros familiares" y 4 eran padres o padrastros. En relación con las edades de las víctimas, 43 estaban entre los 19 y 30 años, 41 entre los 31 y los 50 años, 15 entre los 61 y 65 años y 9 mujeres entre los 13 y los 18 años. El documento, que da cuenta de los nombres de las 126 víctimas, señaló que en enero fueron asesinadas 24 mujeres; 20 en el mes de febrero, 26 en marzo; 16 en abril; 21 en mayo y 19 en junio. Entre las modalidades de los crímenes, el informe estableció que 30 mujeres fueron baleadas, 26 golpeadas y 24 apuñaladas ⁴

Otro dato de interés, según estadísticas del Observatorio Zambrano, es que un 25% de las argentinas es víctima de violencia; y el 50% podría sufrirla en algún momento de su vida.

⁴ Cfr Proyecto de Ley de Ernesto Sanz (S-0018/12)




Proyecto de ley

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, etc.

Cabe mencionar también que la modalidad de aquellas muertes de mujeres, no solo refleja un aumento a través del tiempo en términos numéricos sino también un agravamiento en el grado de violencia y ensañamiento ejercidos contra los cuerpos de las víctimas. Claro ejemplo de esto es el registro de 42 casos de mujeres que fueron quemadas por sus parejas en el período febrero 2010 a febrero 2011. En Colombia, por ejemplo, se han registrado casos de mujeres que fueron atacadas con ácido por sus parejas u hombres, desechados ante la negativa de ellas de contraer matrimonio. Este, entre otros, fue el caso de Gina Potes de 35 años ⁵

También se han realizado diversos estudios de investigación en países como Canadá, Australia, Estados Unidos e Israel donde se indica que entre el 40% y 70% de las mujeres víctimas de homicidio fueron matadas por sus maridos o novios.

Se destaca que en éste tipo de ilícitos, como así también en otros, campea lo que en Criminología se denomina cifra negra, esto es la imposibilidad de contabilizar los hechos verdaderamente ocurridos con los efectivamente comprobados por falta de denuncia de la víctima. De ahí que las estadísticas en tal sentido son una primera aproximación al fenómeno pero no constituyen en modo alguno un abordaje preciso e indicativo de la ocurrencia del hecho real.



⁵ Gina Potes, de 35 años, fue la primer mujer que denunció en Bogotá haber sido quemada con ácido. Ella espera concretar la última cirugía de 24 que ya le han realizado para recomponer su rostro. "Las huellas que me ha dejado no son solo físicas, sino psicológicas", afirma la víctima al recordar su primer reacción, al verse desfigurada, que fue encerrarse.

Proyecto de ley

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, etc.

En el femicidio particularmente se observa que en la mayoría de los casos una mujer que se atreve a denunciar es porque ha sufrido varias veces violencia doméstica. Nunca, o en muy escasas oportunidades, es cuando sucede por primera vez, porque ésta seguramente se trata de un "error", fue una equivocación y probablemente es producto de una alteración momentánea que no volverá a suceder. Es aquí cuando comienza un cuestionamiento si eventualmente la culpa fue de la propia mujer o no, y se produce un fenómeno psicológico de autodefensa de su propia pareja que es, en definitiva, el agresor.

Es reiterado el discurso de estas mujeres diciendo *"no denuncio porque si lo hago se va a saber, me van a golpear de nuevo, no tengo donde llegar y van a agredir a mis niños. También debo tener en cuenta el sustento de mi familia. Si el va preso, ¿quien nos mantiene?"*

Gran parte de los casos que se tramitan en la Oficina de violencia de la Corte Suprema de la Nación, por no decir la mayoría, tienen que ver con personas que en su denuncia relatan por primera vez hechos de violencia que han padecido hace 5 o 10 años atrás, sin mencionar por supuesto aquellos que nunca son denunciados y quedan atrapados en la cifra negra. Es por este motivo que hay que considerar la necesaria protección y concientización de las víctimas para que se atrevan a realizar la denuncia y de esa forma brindarles el esencial resguardo que amerita tal situación, la que consideramos diferente al homicidio, por ser el femicidio un delito de naturaleza sexual y con una brutalidad particular del agresor basada en la cuestión de género. Susana Villarán, Relatora de la Comisión Interamericana de Derechos humanos, denominó a éstos ilícitos, crímenes de odio.

Proyecto de ley

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, etc.

El femicida por lo general se trata de un individuo que esconde su perfil psicológico tras una máscara de amabilidad hacia el mundo exterior, en tanto, en la intimidad del hogar da rienda suelta a sus bajos instintos ⁶

Estos individuos justifican sus crímenes alegando “*que la maté porque es mía y se fue con otro*” debido a que los celos extremos y la posesividad son características notables en estos sujetos, lo que los lleva a considerar que la mujer es un objeto de su propiedad, por ende dispone de ella e inclusive de su vida. El maltratador suele pensar que está en un estrato superior que la mujer, sentimiento generalmente arraigado en su vida desde pequeño. Es interesante el detalle de que los autores de éstos delitos no se cuidan de borrar huellas en el lugar del crimen. Esto sucede porque están convencidos que deben hacerlo, o hacerlo ⁷.

Describiendo los característicos patrones de conducta generales en el femicidio, tanto del agresor como de las víctimas, es que pensamos que debe ser incorporado al Código Penal Argentino como delito autónomo, dentro de los homicidios agravados.

Lo que se propone también con ello es realizar medidas preventivas al respecto, es decir, no cuando las mujeres ya están muertas o gravemente heridas, sino cuando aún pueden evitarse no solo las muertes sino toda otra manifestación de violencia contra ellas.

⁶ (La Nación, 16/02/12, Pág. 14, “Mujeres en peligro”, Esther Abisman)
⁷ (Pionero Pinamar, 3 de marzo 2012, Pág. 14)

Proyecto de ley

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, etc.

Por lo tanto consideramos un aspecto de medular importancia la necesaria atención policial y judicial específica en casos de violencia contra mujeres.

La inadecuada prestación del servicio policial, es una de las causas de que muchas mujeres teman denunciar la violencia que viven.

La idea es diseñar una política integral y adecuada, respaldada con recursos públicos adecuados, para garantizar que las víctimas de la violencia tengan pleno acceso a una correcta protección judicial y que los actos de violencia sean prevenidos, investigados y sancionados. Dentro de dicha estrategia de prevención hay un gran interés por la adopción de políticas públicas destinadas a reestructurar los estereotipos sobre el rol de las mujeres en la sociedad y promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios.

Legislación Comparada

El concepto de femicidio o feminicidio ha tenido un impacto muy considerable en países como Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Chile.

Costa Rica tipifica el femicidio en la Ley N° 8.589 del año 2007 de la siguiente manera: "quien dé muerte a una mujer con la que mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho, declarada o no". Aquí solo se tendría en cuenta el considerado femicidio íntimo.

Guatemala incorporó como femicidio en el Decreto 22 del 2008 a quien en el marco de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, diera muerte a una mujer, por su condición de mujer, valiéndose de las siguientes circunstancias;

Proyecto de ley

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, etc.

- “Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja e intimidad con la víctima.
- Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral.
- Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima.
- Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo.
- En menosprecio del cuerpo de la víctima, para satisfacción de instintos sexuales o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación.
- Por misoginia”

Esta incorporación en el Decreto de Guatemala fue un gran avance teniendo en cuenta la cultura del mencionado país en donde estadísticas e informaciones oficiales, como así también su corriente criminológica imperante, definían a las víctimas como “imprudentes, provocadoras, voluntarias y simuladoras” En efecto, en Guatemala, las mujeres víctimas resultaban culpabilizadas, de modo que sus muertes eran consideradas como consecuencia lógica de relaciones peligrosas o inapropiadas en las que se habían involucrado.

Otros factores que se han evidenciado relacionados a la problemática de la descalificación de la víctima fueron los ligados a prejuicios morales, expresiones culturales o formas de vida poco convencionales- prostitución-. Expresiones de mujeres en una encuesta sobre los homicidios de mujeres nos llaman a reflexionar al respecto. *“A veces tenemos la culpa pues nos metemos*

Proyecto de ley

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, etc.

en problemas. Mientras las autoridades hacen algo, debemos cuidarnos nosotras. Antes de meternos en algo, primero debemos pensar en nuestra familia"

Ante semejante crisis de inseguridad y violencia, los organismos del Estado guatemalteco han debido reconocer el flagelo del femicidio, el desborde de la violencia, y la necesidad de intentar combatirla mediante un Sistema de Justicia que incorpore tal delito con su correspondiente sanción.

El Salvador cuenta con la Ley Especial Integral del año 2002, que en su artículo 45 manifiesta "a quien causare la muerte a una mujer mediando motivos de odio o menosprecio por su condición de mujer, considerando como circunstancias de odio y menosprecio las siguientes;

- Que a la muerte le haya precedido algún incidente de violencia cometido por el autor contra la mujer, independientemente que el hecho haya sido denunciado o no por la víctima.
- Que el autor se hubiese aprovechado de cualquier condición de riesgo o vulnerabilidad física o psíquica en que se encontraba la mujer víctima.
- Que el autor se hubiera aprovechado de la superioridad que generaban las relaciones desiguales de poder basadas en el género.
- Que previo a la muerte de la mujer, el autor hubiere cometido contra ella cualquier conducta calificada como delito contra la libertad sexual.
- La muerte precedida de mutilación"

El Código Penal de Chile fue modificado por la Ley N° 20.480 del año 2010 en donde el artículo 390 se sustituyó por lo siguiente;

Proyecto de ley

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, etc.

“El que conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o hijo, a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes, será castigado como autor de parricidio con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. La pena señalada en el inciso anterior se aplicará también al que conociendo las relaciones que los ligan mate a la persona de la que es o ha sido cónyuge o conviviente, o con la que tiene un hijo en común. Lo dispuesto precedentemente podrá no ser aplicado respecto de quienes han cesado efectivamente su vida en común con a lo menos tres años de anterioridad a la ejecución del delito, salvo que existan hijos comunes. Si la víctima del delito precedente fuere una mujer, el responsable será castigado como autor de femicidio”

En ese país existe una ley de violencia intrafamiliar, originada junto a proyectos presentados en el año 1990, que fue Ley de la República en 1994 y en el año 2002, junto a la Diputada Maria Antonieta Saa se realizaron modificaciones.

Esta ley se acota solamente al femicidio privado, es decir, al homicidio de mujeres que ocurre en una relación de pareja. Pero cuando se estudian situaciones y datos reales hay evidencias que estos crímenes existen más allá del matrimonio y la convivencia, lo que constituyen los femicidios públicos.

La propuesta de instalar la voz Femicidio en el Código Penal chileno agitó fuertemente la compleja realidad sociológica y antropológica y trasgredió los límites de la cultura legislativa vigente hasta entonces.

Proyecto de ley

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, etc.

La aprobación del proyecto de Ley en la Cámara de Diputados de ese país, fue un gran triunfo para la sociedad chilena y una enorme conquista, teniendo en cuenta su profunda y arraigada cultura patriarcal.

Otro dato de interés que permite comparar el fenómeno en otros países, es el caso de Estados Unidos, en donde el Senado recibió recientemente el Proyecto de Ley denominado VAWA que otorga protección a la mujer por violencia doméstica, pero aún no hay acuerdo entre los Legisladores al respecto.

Como se expuso con anterioridad, no cabe duda alguna que el fenómeno del femicidio no tiene fronteras, ni respeta diferencias culturales, sociales, económicas ni regionales para su extrapolación a distintas comunidades. Este hecho produce consecuencias muy serias en sus víctimas y en el entorno social de ellas. Asimismo, desde una perspectiva más macro, estas manifestaciones brutales hacia las mujeres, dañan profundamente el tejido social produciendo insondables heridas que debieran ser aliviadas por el Estado, dentro de lo posible, haciéndose éste responsable de la ocupación y preocupación que ameritan estos lamentables hechos para intentar lograr una eficiente prevención.

A Son también las Asociaciones abocadas a la lucha contra la violencia de género las que insisten en incorporar el femicidio como una figura penal autónoma, lo que implicaría penas más duras. También consideran prioritario la apertura de oficinas de violencia doméstica de la Corte Suprema de Justicia en todas las provincias. Hasta ahora solo fueron inauguradas en Salta, Tucumán y Santiago del Estero.

Proyecto de ley

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, etc.

El fenómeno que venimos de analizar, y el que hemos abordado inclusive desde una visión criminológica, hacen concluir a esta Legisladora que es necesario e imprescindible que estos hechos deleznales ameriten sobradamente incorporarlos a la Legislación Penal, entendiendo, por otra parte, que las sanciones a aplicar a este tipo de infractores, deben ser por demás severas por varios motivos, a saber:

- La peligrosidad que revela este tipo de delincuencia.
- La posición dominante del agresor respecto a su víctima seleccionada. – Dominio psicofísico-
- El grave y frecuente resultado en las acciones criminales de los femicidas. –Muerte, lesiones físicas y psíquicas gravísimas en sus víctimas o también en un vínculo íntimo de ellas como podrían ser los hijos-.

En relación al último ítem señalado es que mencionamos con anterioridad al denominado **femicidio vinculado**. Éste es una nueva categoría a tomar en consideración que puede manifestarse de dos modalidades diversas:

- Aquel que se produce contra una persona que intenta impedir el femicidio.
- Aquel que se produce contra una persona nada más que para castigar, destruir y aniquilar psíquicamente a esa mujer. Caso de Tomás Dameno Santillán ⁶



⁶ Tomás Dameno Santillán, fue el niño de 9 años asesinado en la localidad de Lincoln. El único sospechoso hasta el momento sería la ex pareja de su madre. Adalberto Cuello.

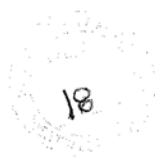
Proyecto de ley

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, etc.

Es frecuente, en el último tipo de femicidio vinculado, que el agresor dañe aquello que la mujer más quiere, sus hijos. Éste no es un dato menor, por lo que aquí estaríamos hablando de la posibilidad de heridas físicas y psíquicas al niño e inclusive poder culminar tal hecho en la muerte del sujeto menor de edad, todo ello en pos de destruir a la mujer y acentuar su vulnerabilidad respecto al agresor. Por lo tanto, fácil es concluir que el delito de femicidio no solo afecta a la víctima de la agresión propiamente dicha, sino a todo el núcleo familiar, por lo que, generalmente, se trata de un delito policausal, que arroja no solo una agresión personalizada sino que puede generar un tendal de víctimas inocentes.

Estos delitos mencionados constituyen además, la violación explícita a los Derechos Humanos de niños y adolescentes específicamente detallados en la Ley 26.061 sin dejar al margen que, en este caso, se estaría tomando al menor como un medio para lograr el fin específico de dañar a la mujer en cuestión, sin la valoración adecuada e intrínseca a todo ser humano, independientemente de su edad cronológica, de ser tomado como un fin en sí mismo. El ser persona tiene un valor natural, innato y bajo ninguna razón debe violarse la dignidad ontológica del sujeto, determinando a éste como un instrumento para alcanzar cierto objetivo.

Las Naciones Unidas reconocen que todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada, constituyen "un grave atentado contra los derechos humanos".

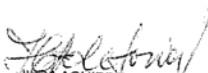


Proyecto de ley

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, etc.

Por último es de desear que al sancionar como ley esta propuesta legislativa, la misma surta los efectos de una verdadera prevención general, desalentando de esta forma conductas aberrantes que lo único que evidencian es que la víctima se transforma en un verdadero objeto de propiedad del autor, lo que repugna toda forma de convivencia civilizada.

Es por todas las razones y fundamentos detallados precedentemente y por la convicción de que tales situaciones ameritan un análisis particular, que solicito a esta Honorable Cámara la aprobación del presente Proyecto de Ley.


MARÍA AGUIRRE DE SORIA
SENADORA NACIONAL
LA RIOJA

(XIV)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1°.- Modificase los incisos 1° y 4° del artículo 80 del Código Penal que quedarán redactados de la siguiente forma:

ART. 80. - Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare:

1º) A su ascendiente, descendiente, cónyuge o ex cónyuge, conviviente o pareja, sabiendo que lo son, o persona con quien haya estado vinculado en una relación íntima o afectiva de cualquier naturaleza.

4º) Por placer, codicia, odio racial, religioso, en razón de la orientación sexual, identidad de género o su expresión.

Artículo 2°.- Incorpórese el Artículo 80 bis al Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:

ART. 80 bis.- Femicidio: Se impondrá reclusión o prisión perpetua, pudiéndose aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare a una mujer por su condición de serlo.

Artículo 3°.- Incorpórese el inciso 4° al artículo 307 del Código Civil, que quedará de la siguiente manera:

4º) Por ser autor, coautor, instigador o cómplice por el delito de femicidio o tentativa de femicidio, contra la madre de sus hijos, respecto de ellos.

Artículo 4°.- Incorpórese el Artículo 310 bis al Código Civil, que quedará redactado de la siguiente manera:

ART. 310 bis.- Subsistirán los deberes alimentarios, manutención, educación, habitación, asistencia y gastos por enfermedad, en todos los casos de privación de la patria potestad previstos en este Código.

Artículo 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Elena M. Corregido.-

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, sin distinción alguna de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Desde un punto de vista más relacional, los derechos humanos se han definido como las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad, que permita a los individuos ser personas jurídicas, identificándose consigo mismos y con los otros, pero se ha dado una escasa relevancia en el ámbito de los derechos humanos a las violencia sexual que sufren las mujeres en todas sus manifestaciones.

Si hablamos de la violencia contra la mujer, podemos definirla como todo tipo de violencia ejercida contra la mujer por su condición de tal. Esta violencia, es consecuencia de la histórica posición de la mujer en la familia patriarcal, subordinada al varón, carente de plenos derechos como persona, presentando numerosas facetas que van desde la discriminación y el menosprecio hasta la agresión física o psicológica y el asesinato. Produciéndose en muy diferentes ámbitos (familiar, laboral, formativo, etc.), y adquiere especial dramatismo en el ámbito de la pareja y doméstico, en la cual anualmente, decenas o cientos de mujeres son asesinadas a manos de sus parejas en diferentes países del mundo.

En la Roma clásica, El paterfamilias tenía sobre sus hijos en derecho a vida y muerte; podía venderlos como esclavos en territorio extranjero, abandonarlos al nacer o entregarlos a manos de los familiares de sus víctimas si habían cometido algún delito; desposarlos y pactar o disolver sus matrimonios. Pero así como los varones pasaban a ser paterfamilias cuando moría el padre, y adquirían todas sus atribuciones jurídicas dentro de su familia, las mujeres, por el contrario, iban a permanecer de por vida subordinadas al poder masculino, basculando entre el padre, el suegro y el esposo.

La Asamblea General de las Naciones Unidas en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se definió la violencia contra la mujer en su artículo 1º, como: “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

En 1995, bajo los auspicios de la ONU en el Congreso sobre la Mujer celebrado en Pekín, se definió la expresión violencia de género siendo la traducción del inglés gender-based violence o gender violence. Con ella se identifica la violencia, tanto física como psicológica, que se ejerce contra las mujeres por razón de su sexo, como consecuencia de su tradicional situación de sometimiento al varón en las sociedades de estructura patriarcal.

En el mundo, la violencia contra la mujer por parte de su pareja o ex pareja está generalizada dándose en todos los grupos sociales independientemente de su nivel económico, cultural o cualquier otra consideración. Aún siendo de difícil cuantificación, dado que no todos los casos trascienden más allá del ámbito de la pareja, se supone que un elevado número de mujeres sufren o han sufrido este tipo de violencia.

El femicidio toma en consideración: la relación inequitativa entre los géneros, la estructura de poder y el control que tienen los hombres sobre las niñas y mujeres o personas de identidad de género femenina por el solo hecho de serlo.

En países donde no existe la figura de femicidio, este delito es juzgado como un homicidio, parricidio o infanticidio de acuerdo a cada legislación en particular; por todo esto tiene que haber un equilibrio entre el debido proceso hacia el victimario y la garantía de su derecho de legítima defensa con la garantía de los derechos de las víctimas y también de las víctimas colaterales de los femicidios.

Los rasgos más visibles de la violencia contra la mujer son: las golpizas y los asesinatos, sin embargo, los maltratos de “baja violencia” y los “maltratos psíquicos” que mantenidos en el tiempo quebrantan la autoestima de la mujer, también ocurren. Cuando trasciende un caso de violencia, la mujer puede llevar años sufriendolo. Y si los maltratos pueden producirse en cualquier etapa de la historia de una relación, cualquiera sea la naturaleza de la misma, es en el momento de la ruptura y tras esta, si se produce, cuando llegan a exacerbarse.

Es frecuente tratar el tema de los maltratos como casos individuales, entendiendo que los maltratadores sufrirían una suerte de trastornos emocionales que los conducirían a maltratar a la mujer y a agredirlas. Esta sería una visión del problema tranquilizadora que no pondría en cuestión el modelo patriarcal.

Un avance significativo en la temática lo constituye la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer: Convención de Belem Do Para”. En su artículo 1° que “debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. Asimismo esta Convención garantiza a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado y al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.

Además establece como obligación de los Estados Partes el "incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer".

Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.

Elena M. Corregido.-

(XV)